

## La 'diplomacia silenciosa', demasiado silenciosa para algunos

La confianza en la renovada voluntad política por concluir la Ronda Doha está disminuyendo entre los negociadores de comercio en Ginebra a pesar de la reanudación formal de las negociaciones a gran escala a principios de febrero.

Hay un creciente sentimiento de que las reuniones frecuentes de la 'diplomacia silenciosa' entre los ministros de comercio y otras autoridades pueden ser parte del problema más que de la solución. Estos encuentros se realizan a puerta cerrada y sólo participan un puñado de países. Se sabe poco sobre la esencia de estos intercambios, lo cual hace que la mayoría de Miembros de la OMC tengan que adivinar el rumbo que llevan dichas conversaciones.

La última ronda de negociaciones bilaterales en Londres, en la que participaron altos negociadores agrícolas de Brasil, los EE.UU., la India y la UE (denominados el G-4) sólo ofreció la certeza de que los países ahora tienen una mejor relación negociadora y una mayor comprensión de los puntos de vista de cada uno de ellos. Sin embargo, los participantes enfatizaron que no se han registrado avances en materia de reducciones de subsidios locales ni en acceso a los mercados, y queda mucho trabajo por hacer.

Una de las razones dadas a conocer por el lento progreso, es que los países del G-4 intentan obtener mayor claridad respecto del posible impacto del acceso a los mercados de los productos agrícolas 'especiales' y 'sensibles'. Al respecto, se están llevando a cabo consultas

bilaterales con otros Miembros de la OMC para identificar qué productos específicos tienen más importancia para ellos.

### India bajo presión

Después de la reunión sobre agricultura, que se llevó a cabo en Londres, la Representante Comercial de los EE.UU., Susan Schwab, dijo durante una entrevista televisiva que la India está "menos predispuesta a ser un contribuyente proactivo" que otros países envueltos en los esfuerzos de la diplomacia silenciosa. Schwab sostuvo que "La India tiene un muy, pero muy importante papel que jugar acá, y esperamos que la India sea parte de la solución en vez de retrasar las conversaciones".

La señora Schwab, dijo que la India se había mantenido firme en su posición respecto de que los países en desarrollo deberían tener el derecho de designar hasta un 20 por ciento de sus líneas

arancelarias agrícolas como productos 'especiales', lo que les permitiría mantener aranceles de importación más altos. Según los EE.UU. con tales porcentajes dichos países estarían virtualmente en condiciones de cerrar la puerta a todos los productos agrícolas importados.

*"India sugirió que los EE.UU. no estuvieron dispuestos a definir su posición en Londres. Ellos quieren que todos los otros países muestren sus cartas para que ellos decidan si quieren jugar. ¿Cómo puede ser posible esto?"*

## EN ESTA EDICIÓN

- 1 La 'diplomacia silenciosa', demasiado silenciosa para algunos
- 3 Canadá, la Administración Bush, el lobby agrícola y el "Farm Bill": algo tiene que cambiar
- 6 Extensión de la TPA requerirá importantes cambios de política
- 7 La relación comercial entre EE.UU. y Andinos aun está en la balanza
- 9 Reglas de la OMC y políticas de energía sostenible ~ **Yulia Selivanova**
- 13 La Agenda del Desarrollo de la OMPI avanza ~ **Fleur Claessens**
- 15 Construyendo un régimen internacional de distribución justa de beneficios; ¿cómo valorar los recursos genéticos? ~ **Pablo Bifani**
- 18 Las negociaciones internacionales sobre la revelación del origen en solicitudes de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI): avances y perspectivas ~ **Jorge Cabrera Medaglia**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
COSTA RICA

CINPE  
CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ICTSD

International Centre for Trade  
and Sustainable Development

## Puentes

### Entre el comercio y el desarrollo sostenible

**Puentes** tiene como objetivo el reforzar la capacidad de los actores sociales en el área de comercio internacional y desarrollo sostenible, poniendo a su disposición información y análisis relevante para una reflexión más informada sobre estos temas. Además, busca crear un espacio de comunicación y de generación de ideas para todos aquellos involucrados en los procesos de formulación de políticas y de negociaciones internacionales.

**Puentes** es publicada bimensualmente por el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD), y por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica.

#### Comité Editorial

Maximiliano Chab  
Eduardo Escobedo Reachi  
Greivin Hernández González  
Carlos Murillo Rodríguez

#### Contribuyeron para este número

Daniela Álvarez Keller  
Maximiliano Chab  
Greivin Hernández González  
Max Valverde Soto

ISSN: 1563-0013

#### ICTSD

Director ejecutivo: Ricardo Meléndez Ortiz  
7, chemin de Balexert  
1219, Ginebra, Suiza  
puentes@ictsd.ch  
www.ictsd.org

#### CINPE

Director: Rafael Díaz  
Asistente administración: Gabriela Vega Vindas  
Tel.: (506) 263-4550  
Apdo. Postal 555-3000  
Heredia, Costa Rica  
www.cinpe.una.ac.cr

La producción de **PUENTES** entre el comercio y el desarrollo sostenible ha sido posible gracias al apoyo generoso de la Agencia suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE).

Para suscribirse gratuitamente a **PUENTES**, envíe un correo electrónico a [puentes@ictsd.ch](mailto:puentes@ictsd.ch) incluyendo la palabra "suscripción" en el asunto.

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en **Puentes** son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de ICTSD, de CINPE, ni de las instituciones que ellos representan.

Autoridades del Ministerio de Economía de la India manifestaron su sorpresa respecto de los comentarios de Schwab, sugiriendo que los EE.UU. no estuvieron dispuestos a definir su posición en Londres. "Ellos quieren que todos los otros países muestren sus cartas para que ellos decidan si quieren jugar. ¿Cómo puede ser posible esto?" preguntó uno de ellos. Los negociadores europeos también han manifestado su frustración respecto de la negativa de EE.UU. a discutir una oferta mejorada para los subsidios antes de que la UE presente una nueva propuesta en materia de aranceles agrícolas.

### ¿Dónde está el valor agregado de las conversaciones en Ginebra?

Muchos negociadores comerciales están comenzando a cuestionar el valor del relanzamiento de las negociaciones en Ginebra dado que el futuro de la Ronda de Doha se está moldeando en otro lugar. De hecho, poco ha cambiado desde noviembre cuando los Miembros decidieron reiniciar las conversaciones informales a nivel técnico, mientras esperaban un acuerdo político en los parámetros más amplios de la Ronda (Puentes, Vol. 7 No 5, octubre-diciembre, 2006, página 1). Según lo demostrado por la falta de compromiso de los delegados en una reunión cuyo propósito era aclarar algunas preguntas generales sobre los productos agrícolas sensibles, también los temas técnicos están ligados a decisiones políticas, y no pueden ser resueltos sobre la nada.

Hay que enfocarse en el meollo del asunto en vez de prestar atención a los 'números encabezado' que contribuyen a crear un ímpetu por anticipado de los aranceles industriales. El Presidente del Grupo de Negociación sobre acceso a los mercados de productos no agrícolas (AMNA) admitió el 26 de febrero que la insistencia de los Miembros en la necesidad de que las conversaciones agrícolas avancen primero, significa que nada pasará en el ámbito de AMNA hasta que no ocurra algo en otro lugar.

Como reflejo del continuo estancamiento, parece que las fechas clave para lograr avances han pasado de principios de abril a finales de junio. Pascal Lamy ha destacado que los actores clave - entendidos generalmente como los miembros del G-4 - deberían llegar a algún tipo de entendimiento a más tardar en abril, de manera que puedan ofrecerle a los Miembros de la OMC en su totalidad, un par de meses para que trabajen en el acuerdo antes de que expire la Autoridad para la Promoción del Comercio en los EE.UU. que ocurrirá el 1 de julio de este año.

### Pensar más allá

Mientras tanto, continúan los esfuerzos mas allá de las negociaciones gubernamentales en la OMC y en otras partes para "rescatar la Ronda". En febrero se llevaron a cabo dos acontecimientos; uno auspiciado por el Grupo Evian; y el otro organizado conjuntamente por la Fundación William y Flora Hewlett, el Fondo German Marshall de los Estados Unidos de

América y el Seminario de Salzburgo. Entre los participantes se encontraba una gran gama de expertos en comercio provenientes de diferentes áreas.

Una conclusión en común que surgió de ambas actividades, fue la necesidad de entender por qué es importante que haya un resultado positivo de la Ronda de Doha y del comercio en general. Además, se espera que se incremente la inestabilidad de los factores que moldearán los próximos diez años como: la lucha creciente por acceso a los recursos naturales, el cambio climático, el conflicto entre Israel y Palestina, los conflictos entre la globalización y la soberanía y las diferentes tasas de crecimiento tanto entre, como dentro de los países. Los políticos y el público en general no deberían subestimar los beneficios de la paz y la seguridad que se asocian con un sistema de comercio más equitativo y una reducción de la brecha entre los que tienen y los que no tienen. La dimensión del desarrollo de la Ronda de Doha no

*"Como reflejo del continuo estancamiento, parece que las fechas clave para lograr avances han pasado de principios de abril a finales de junio"*

debería de verse únicamente en términos de un trato especial y diferenciado, o ayuda para el comercio, sino como un derecho a competir, eliminar distorsiones y reequilibrar las normas.

El profundo sentido de incertidumbre que tiñe la percepción pública sobre la globalización se puede mitigar al asegurar y comunicar de manera efectiva que la asistencia de ajustes y otras políticas se establecen para ayudar a aquellos que se han visto afectados negativamente por los patrones de comercio.

De hecho ya vivimos en un mundo en el cual las fronteras nacionales significan poco para los negocios, donde grandes grupos de trabajadores se salen de la industria y donde la producción de un biocombustible derivado del maíz en un país afecta el precio de las tortillas en otro. Uno de los participantes del seminario de Salzburgo afirmó que a pesar de que el contexto y los actores principales han cambiado de forma drástica, las negociaciones actuales siguen basadas en la misma concepción de comercio que sustentó la Ronda Uruguay y no se abordan los diferentes retos a que se enfrenta el mundo 30 años después.

La sesión dedicada a sugerir nuevas formas de avanzar patrocinada por el Grupo Evian dio como resultado algunas ideas concretas. La primera fue la necesidad de tener un texto completo o documento de referencia que ofrezca una base para las negociaciones. Si un documento de estos no se puede lograr por medio de un enfoque “de abajo hacia arriba”, entonces, “a pesar de todos los riesgos consiguientes, se debe imponer un proceso de arriba hacia abajo. La mayoría estuvo de acuerdo en que fracasar en los próximos tres meses era una opción preferible a la de tomar el riesgo de estrellarse dentro de dos años ya que, en general, en este momento la zona de aterrizaje está relativamente clara en la mente de la gente”, afirmó el grupo en un comunicado oficial del 13 de febrero.

El Grupo Evian también dijo que “el uso del comercio como arma política y social de conveniencia inmediata y bajo el pretexto de acuerdos preferenciales debe de atenuarse”, y apeló a una moratoria sobre “la actividad bilateral contraproducente mientras todo el paquete de incentivos vuelve a Ginebra en un intento por salir del estancamiento en que se encuentra la Agenda de Desarrollo de Doha”.

## Canadá, la Administración Bush, el lobby agrícola y el “Farm Bill”: algo tiene que cambiar

Habían transcurrido apenas ocho días del presente año cuando Canadá inauguró el trabajo del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC al solicitarle la celebración de consultas con el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.).<sup>1</sup> El objetivo canadiense: en el plano legal, discutir la validez de varios programas de subsidios agrícolas de Estados Unidos; en el plano político, tratar de influenciar la discusión que este año se dará en el Congreso estadounidense por la renovación de la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002, mejor conocida como “Farm Bill” (ver recuadro adjunto). De no llegarse a un acuerdo, Canadá podrá solicitar el establecimiento de un panel que juzgue el caso. Este artículo hace una breve reseña de lo que está en discusión legal y las posibilidades para las partes.

### Los argumentos canadienses

En primer lugar, Canadá enfoca sus baterías en las subvenciones y ayudas internas concedidas a los productores y/o exportadores estadounidenses de maíz concedidas desde la campaña de comercialización de 1996<sup>2</sup> en adelante, a saber: los pagos por préstamos de comercialización, los pagos directos, los pagos anticíclicos, los pagos por contratos de producción flexible, los pagos de asistencia por pérdida de mercados y las garantías de créditos a la exportación para facilitar la exportación de maíz.

Canadá considera que estas subvenciones adoptan la forma de un sostenimiento de los ingresos o los precios, lo que ha tenido un efecto significativo de reducción y contención de la subida de los precios del maíz en el mercado canadiense durante las campañas de comercialización 1996-2006, en violación del apartado c) del artículo 5 y el párrafo 3 c) del artículo 6 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

¿Por qué? Porque según Canadá mediante estos programas los EE.UU. ponen a disposición de sus exportadores una serie de primas y otras condiciones más favorables que las que obtendrían en el mercado. Dichas primas serían insuficientes para cubrir a largo plazo los costos y pérdidas de funcionamiento de los programas. Por consiguiente, estos programas otorgan subvenciones supeditadas a los resultados de exportación, en contra de lo establecido

en los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC. Estas medidas infringirían también el párrafo 3 del artículo 3, el artículo 8, el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura.

En relación con otros productos agrícolas, y esto es de mayor relevancia por las posibles repercusiones para el sistema de comercio multilateral, Canadá acusa a los EE.UU. de contabilidad impropia. En efecto, Canadá sostiene que los pagos de asistencia por pérdida de mercados, los pagos directos y los pagos anticíclicos al sorgo en grano, la cebada, la avena, el algodón americano (upland) y el arroz, las habas de soja y otras semillas oleaginosas deberían contabilizarse como subsidios de “Caja Ámbar”<sup>3</sup>, pues no se ajustan plenamente al párrafo 6 b) del Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura. Ésta no ha sido la práctica estadounidense hasta ahora, que los excluye.

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura, los EE.UU. no pueden prestar ayuda a sus agricultores por encima de 19.103,294 millones de dólares anuales. Cuando los pagos anuales previstos en los programas antes mencionados se incluyen en la medida global de ayuda<sup>4</sup> de los EE.UU. para los productos respectivos indicados en los párrafos anteriores, la ayuda de los EE.UU. excede los niveles especificados en 1999, 2000, 2001, 2004 y 2005 respectivamente. Por consiguiente, Canadá argumenta que mediante la

## El “nuevo” Farm Bill

Uno de los objetivos fundamentales de esta propuesta es proteger el sistema de ayudas de disputas judiciales. En palabras de Mike Johanns, Secretario de Agricultura, se trata de hacer los subsidios agrícolas “más equitativos, predecibles y susceptibles de resistir embates judiciales.” De esta forma, tal y como comentamos en el pasado, la nueva propuesta de la Administración Bush para la renovación del “Farm Bill” luego de su expiración en septiembre del 2007 reduciría los pagos por subsidios agrícolas en 17.5 mil millones de dólares durante los siguientes 5 años. No obstante, según los detractores de la propuesta la mayor parte de la reducción no provendría de una reforma profunda, sino de precios mundiales más altos de los principales productos subsidiados.

Actualmente, la política estadounidense busca proteger el ingreso de los granjeros: por ejemplo, si el precio mínimo acordado es de \$5 por bolsa de maíz y el precio del mercado es de \$2, los EE.UU. le pagan la diferencia al agricultor, promoviendo la sobreproducción. No obstante, la propuesta Bush pretende que los subsidios causen menos distorsión al comercio. Por ejemplo, el precio mínimo ante el cual empiezan a operar los mecanismos de asistencia se establecería en el 85% del promedio de los precios en los últimos cinco años (excluyendo el año más alto y el más bajo). Para los críticos, la baja no será significativa.

También se proponen cambios en los pagos anticíclicos. Bush propone reemplazar los incentivos por alta producción, con subsidios basados en el ingreso que empezarían a operar cuando el ingreso nacional por acre para el producto en cuestión baje de un nivel predeterminado. Sin embargo, este ingreso mínimo por acre estaría ligado a los precios mínimos establecidos en el “Farm Bill” de 2002, lo que para algunos pone en duda el verdadero alcance de la reforma. La propuesta también incluye nuevos productos agrícolas, tales como las frutas, que podrían acceder a los fondos de ayuda, así como un ingreso máximo por agricultura por sobre el cual no se podría obtener ayuda.

En cualquier caso, debido al incremento mundial en los precios de varios de los productos apoyados, ciertamente los subsidios iban a bajar en los próximos cinco años sin necesidad de cambio alguno. Esto le ha permitido a la Administración estimar que las nuevas propuestas constarán US\$10 mil millones menos que lo que se gastó bajo el actual “Farm Bill”. El resto de los ahorros provienen de US\$7.5 mil millones en “asistencia ad hoc para desastres” que se entregó en los pasados cinco años.

Las reacciones de algunos de los principales socios comerciales de los EE.UU. ante los cambios propuestos no fueron muy optimistas. El Ministro de Agricultura del Canadá Check Strahl dijo al periódico “The Globe” de ese país que la propuesta debía ser alabada por su intención de traer “más disciplina” al gasto agrícola, pero que el precio de US\$87 mil millones permanece altamente inaceptable.

Fuente: “BRIDGES Weekly” del 7 de Febrero del 2007.

exclusión indebida de la ayuda interna, los EE.UU. prestan ayuda a los productores nacionales por encima de los niveles de compromiso adquiridos, en contra de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura.

### La política

¿Hay mérito en el reclamo canadiense o se trata de una estrategia para influenciar la discusión del Farm Bill? Ambas. Por un lado, no es casual que Canadá haya decidido iniciar este proceso en 2007. Justamente

en este año los EE.UU. renegociarán en su Congreso esta legislación que solamente en 2005 posibilitó la entrega de 21 mil millones de dólares en subsidios, 9 mil millones más que en el 2004. Ante el crecimiento, la administración Bush ha estado tratando de convencer al Congreso de aceptar algunas modificaciones en los programas de subsidio.

La presión de demandar provino de los productores canadienses de maíz. Durante años, estos agricultores han tratado de convencer a las autoridades nacionales de

que existen subsidios al otro lado de la frontera que generan importaciones baratas, lo que justifica la necesidad de aranceles. No obstante, en abril de 2006 la Corte Canadiense de Comercio Internacional concluyó que los productores nacionales no estaban siendo lesionados por las importaciones estadounidenses, hecho ampliamente publicitado por los productores estadounidenses.

En este sentido, Gretchen Hamel, portavoz de la Representante Comercial de los EE.UU. Susan Schwab, dijo: “Los precios del maíz se han incrementado significativamente en los Estados Unidos y Canadá y la propia Corte Canadiense de Comercio Internacional dijo el año pasado que los subsidios estadounidenses no afectaban a los productores canadienses. Dada la mejora dramática en el mercado el año pasado, nos sorprende que Canadá considere que nuestros programas de maíz ahora les causen daño en violación de las reglas de la OMC.”

### El mérito del caso

No obstante, los EE.UU. tienen razones para mirar con lupa este caso. Analistas comerciales tienen bajo la mira a los subsidios al maíz y creen que no aguantarían un escrutinio cuidadoso ante la OMC<sup>5</sup>. Además, hay jurisprudencia que nos invita a pensar así, principalmente el caso “Estados Unidos-Subsidios en el algodón estadounidense”<sup>6</sup>. Si bien no es un caso igual al presente, si guarda muchas analogías. En él, el grupo especial (GE) le dio la razón a Brasil al indicar que ciertos pagos directos de los EE.UU., tales como los pagos por contratos de producción flexible y los pagos directos -similares a los de estas consultas-, constituyen apoyo doméstico causante de distorsión al comercio. Al estar relacionados con

el tipo de producción y rendimiento, estos pagos no pueden ser caracterizados como pagos “desvinculados”. Los EE.UU. habían argumentado que sus pagos no promovían la sobreproducción pues no estaban vinculados con requisitos de producción, es decir, eran otorgados independientemente de la cantidad de producción.

Pero aún si así hubiera sido, es decir, si los pagos hubieran estado desvinculados del rendimiento, el GE declaró que los pagos vinculados a decisiones de producción



tampoco pueden ser considerados como “no distorsionantes”. En el caso del algodón – al igual que en este de marras – los pagos estaban relacionados con el tipo de producción agrícola. Por ejemplo, los productores de frutas no eran elegibles para pagos directos. No obstante, el GE no indicó que estas ayudas deban ser contabilizadas dentro de la Caja Ámbar. Finalmente, el GE indicó que las garantías de créditos a la exportación ofrecidos a los productores de algodón eran subsidios prohibidos y debían de ser eliminados “sin demora”. Bajo este programa, el Gobierno le pagaba a los productores la diferencia entre el precio doméstico y el internacional, para asegurarse que el algodón nacional pudiera ser vendido en los mercados internacionales con un margen de ganancia.

## Conclusión

Sin duda este caso generará una gran resonancia a nivel internacional pues es la primera vez que Canadá decide atacar a gran escala los subsidios agrícolas de los Estados Unidos. “Esto es más que un simple disparo. Es una provocación deliberada del Canadá para una batalla a gran escala”, dijo Herman Case, abogado de comercio exterior de Cassels Brock & Blackwell LLP en Toronto. Y Canadá no está sola. Ya Argentina, Australia, Brasil, la Unión Europea, Uruguay, Nicaragua, Tailandia y Guatemala se adhirieron legalmente al proceso de consultas.

Como en todo caso ante una corte, el resultado es incierto. No obstante, es posible prever que el sistema estadounidense de subvenciones al maíz y los otros productos mencionados que hoy conocemos pronto sufrirán importantes transformaciones. Esto se daría por una combinación de factores. Por un lado, el proceso ante la OMC definitivamente influenciará la discusión a lo interno de los Estados Unidos de forma tal que se podría lograr algún tipo de autolimitación. Aunque el Secretario estadounidense de Agricultura, Mike Johanns, manifestó el mismo día en que se interpuso el procedimiento, que los EE.UU. defenderán vigorosamente sus programas de ayuda agrícola, también le manifestó a grupos agrícolas de presión que la iniciativa canadiense es otra indicación de que sin reforma “la red de seguridad en la que se apoyan podrían ser retirada”. Pero por otra parte, a partir de un análisis normativo y la reciente jurisprudencia de la OMC es altamente improbable que el

sistema de subsidios de los EE.UU. salga ileso de este ataque.

¿Cuán fuerte podría ser el impacto? es algo que está por verse. En este caso, no será de extrañar que los EE.UU. intensifiquen el lobby político que durante la Ronda de Doha han generado a favor de su propuesta de trasladar subsidios tales como los pagos por contratos de producción flexible, los pagos anticíclicos y las garantías para facilitar la exportación de la Caja Ámbar a la nueva Caja Azul. Según EE.UU., estos subsidios serían aún menos distorsionantes que los de Caja Ámbar pues limitarían la cantidad de producción. Adicionalmente, este país había estado buscando una extensión de la “cláusula de paz”, aquella negociada por la Unión Europea y los EE.UU. para evitar durante años demandas contra sus programas de ayuda agrícola. Dentro de pocas semanas veremos si el proceso de consultas arroja algún acuerdo conciliatorio o si en caso contrario la “pax” agrícola entre los grandes de la OMC ha llegado a su fin.

<sup>1</sup> Organización Mundial del Comercio. (Enero 11, 2007). Estados Unidos – Subvenciones y otras medidas de ayuda interna para el maíz y otros productos agropecuarios. Solicitud de celebración de consultas presentada por el Canadá. Documento WT/DS357/1 G/L/812, G/SCM/D73/1, G/AG/GEN/74.

<sup>2</sup> La “campaña de comercialización” del maíz va del 1º de septiembre al 31 de agosto. Por ejemplo, la campaña de comercialización de 2005 comenzó el 1º de septiembre de 2005 y terminó el 31 de agosto de 2006.

<sup>3</sup> Es decir, subsidios causantes de distorsión del comercio pero permitidos dentro de ciertos niveles negociados por cada país en la forma de Medida Global del Ayuda.

<sup>4</sup> Es la cuantificación de toda la ayuda gubernamental que causa distorsión sobre el comercio internacional. Equivale al nivel anual expresado en términos monetarios de la ayuda nacional otorgada por productos o productores.

<sup>5</sup> Oxfam International. (2005). Media Brief: Analysis of recent proposals in WTO agriculture negotiations. En particular se analiza la presunta ilegalidad de los subsidios de comercialización y los pagos anticíclicos.

<sup>6</sup> Organización Mundial del Comercio. (2005). Estados Unidos-Subsidios en el maíz estadounidense. Reporte del Órgano de Apelación. WT/DS267/AB/R.

## Publicaciones

**Allain M. (2007).** *Trading Away Our Oceans – report. Why trade liberalization of fisheries must be abandoned.* Amsterdam: Greenpeace International.

**Amigos de la Tierra Internacional. (2007).** *Si esto es desarrollo ¡Pueden quedárselo! Madrid.*

**Arias, D. (2007).** *Agricultural support policies and programs in Central America and Dominican Republic in light of trade liberalization.* Washington: IADB.

**Food and Agriculture Organization of the United Nations –FAO- (2007).** *The state of world fisheries and aquaculture 2006.* Roma: FAO.

**Gaarder, M.; Glassman A. & Todd J. (2007).** *Demand-Side Incentives for Better Health for the Poor: Conditional Cash Transfer Programs in Latin America and the Caribbean.* Washington: IADB.

**Institute for Agriculture and Trade Policy –IATP- (2007).** *A Fair Farm Bill for the World.* Minnesota: IATP.

**Institute for Agriculture and Trade Policy –IATP- (2007).** *Guessing Game. How will the U.S. play agriculture trade in 2007.* Minnesota: IATP.

**OIT/OMC (2007).** *Trade and Employment Challenges for Policy Research.* Ginebra: OMC.

**Sittenfeld P. (2007).** *Ventajas y limitaciones de la experiencia de Costa Rica en materia de políticas de competencia: un punto de referencia para la región centroamericana.* México: CEPAL.

## Extensión de la TPA requerirá importantes cambios de política

Los demócratas han notificado al presidente Bush que se requerirán reformas importantes en materia de política interna y externa para que la ley que le otorga la facultad de negociar acuerdos comerciales con una implicación limitada del Congreso sea renovada.

La autoridad de promoción comercial (TPA, por sus siglas en inglés) permite al ejecutivo estadounidense negociar y firmar acuerdos comerciales, para luego someterlos al Congreso para su ratificación o rechazo. La actual TPA expira el 1 de julio de 2007, por lo que, cualquier nuevo acuerdo deberá ser presentado en el Congreso antes del 31 de marzo, para así otorgar a los legisladores los 90 días estipulados por la ley para examinar el texto antes de votar a favor o en contra del mismo. El presidente Bush ha solicitado al Congreso la extensión de la TPA, argumentando que es la “única manera en la que podemos finalizar la Ronda de Doha y avanzar en otros acuerdos”.

El 12 de febrero se lanzó un grupo de lobby llamado Comercio para América con la idea de generar el apoyo para lograr la renovación de la TPA. La coalición está conformada por varios pesos pesados, incluyendo la Cámara de Comercio de los EE.UU., la Federación Nacional de Minoristas, la Asociación de Productos Alimenticios, y la Asociación Nacional de Manufactureros.

No obstante, aun no es un hecho de que se otorgue la extensión de la TPA debido a que los Demócratas controlan las dos Cámaras del Congreso sumado al escepticismo que existe acerca de los beneficios de la globalización. El 30 de enero, el presidente del Comité de finanzas del Senado, Max Baucus, dijo que el veía la extensión “como una oportunidad para abordar las legítimas preocupaciones de los estadounidenses sobre el comercio, con una aplicación más vigorosa de las leyes y acuerdos, mayores consultas en el Congreso – de manera que podamos pelear por nuestros trabajadores y empresas – y mejores estándares laborales y ambientales”. Durante una audiencia que se llevó a cabo el 15 de febrero, el senador Baucus también dijo que el cumplimiento de las leyes de defensa comercial para proteger a los trabajadores contra los aumentos repentinos de las importaciones

provenientes de China, podría ser un factor importante durante el debate sobre la extensión de la TPA.

En una carta enviada el 13 de febrero, la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros 14 legisladores demócratas solicitaron al presidente Bush “trabajar [...] para desarrollar un nuevo rumbo en la política comercial de los EE.UU. que tenga en cuenta de manera significativa el insostenible déficit comercial de EE.UU. y promueva una

*“...solicitaron a Bush “trabajar [...] para desarrollar un nuevo rumbo en la política comercial de los EE.UU. que tenga en cuenta de manera significativa el insostenible déficit comercial de EE.UU. y promueva una amplia base para un crecimiento justo para todos los estadounidenses”.*

amplia base para un crecimiento justo para todos los estadounidenses”. La carta hace un llamado a la administración para que en un plazo de 90 días, se establezca un plan detallado para eliminar el incremento en los déficits comerciales con China (233 miles de millones de dólares), la Unión Europea (117 miles de millones de dólares) y Japón (88 mil millones de dólares). La carta también destaca que los futuros acuerdos de libre comercio y aquellos pendientes deberían ser enmendados con un “compromiso para adoptar y cumplir de manera efectiva los 5 estándares laborales reconocidos internacionalmente”. Algunos legisladores dijeron que el Congreso estaría listo para aprobar “un acuerdo [Ronda de Doha] fuerte y ambicioso que represente los objetivos centrales de EE.UU., incluyendo en las áreas de agricultura, bienes industriales y servicios, y que mantenga (y asegure que el sistema

de solución de diferencias de la OMC no perjudique) a las firmes y justas leyes comerciales estadounidenses”.

### Los sindicatos solicitan cambios

La Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) solicitaron al Presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Charles Rangel, que todos los acuerdos comerciales que firme EE.UU. incluyan “estándares internacionales obligatorios en materia ambiental y laboral con mecanismos eficaces de cumplimiento que proporcionen remedios y las penalidades equivalentes a aquellas que estén disponibles para las violaciones de las disposiciones comerciales”.

Asimismo, la AFL-CIO afirmó que deben ser llenados los vacíos legales que confieren mayores derechos a los inversores extranjeros que los otorgados a sus contrapartes locales. Asimismo expresaron su preocupación respecto de las disposiciones ADPIC-plus que se encuentran en los acuerdos de promoción comercial (APC) recientemente concluidos. Ellos sostienen que dichas disposiciones “pueden ser utilizadas para limitar la facultad de un gobierno para otorgar licencias obligatorias, permitidas en el acuerdo ADPIC y en la Declaración de Doha”. AFL-CIO hizo hincapié en que los “gobiernos tienen que mantener su facultad de destinar sus impuestos a la creación de puestos de trabajo locales y perseguir otros legítimos objetivos de carácter social” y que las normas sobre compras de gobierno que restringen esa facultad son “inapropiadas”.

Ellos agregaron que en un futuro, habrá que incluir una protección amplia y concreta para los servicios públicos que se encuentran en el capítulo de servicios de los APC. Asimismo, solicitaron la inclusión de salvaguardias más fuertes en los acuerdos comerciales bilaterales.

## APC y medioambiente

Mientras las cuestiones sobre las enmiendas en materia laboral están relativamente claras, sólo un número limitado de demócratas han detallado las modificaciones relacionadas con el medioambiente que ellos están buscando. Entre ellas se encuentra aquella que prevé que los inversores podrán demandar a los Estados a causa de “medidas equivalentes a la expropiación”. Utilizando una disposición similar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las empresas han cuestionado judicialmente las leyes sobre medioambiente y sobre salud de los Estados anfitriones, que disminuyen o anulan el valor de las inversiones.

Los 11 firmantes de la propuesta sugirieron incluir en los APC, una excepción del estilo Artículo XX del GATT. Dicha excepción permitiría a los participantes adoptar una legislación en materia ambiental y de salud que podría ser compatible con otras disposiciones en el Tratado, siempre y cuando éstas sean aplicadas de forma no-discriminatoria. Adicionalmente, el grupo propuso requerimientos más estrictos para que los Miembros de un APC apliquen los acuerdos multilaterales de medio ambiente de los cuales forman parte, así como asegurar que las sanciones y reglas que aplican en caso de violación de dichos acuerdos, sean aplicadas en caso de violación de un APC. Sin embargo, no hay indicaciones de que haya un amplio apoyo para estas propuestas.

## La representante comercial de EE.UU. solicita un estudio sobre acceso libre de cuotas y aranceles

En otras noticias relacionadas con la política comercial de EE.UU., el 16 de febrero la Representante comercial Susan Schwab, solicitó a la Comisión de Comercio Internacional que lleve a cabo un estudio confidencial sobre los impactos económicos derivados del otorgamiento de acceso libre de cuotas y aranceles al 97 por ciento de los productos originados en los países menos desarrollados. La señora Schwab solicitó a la Comisión que terminara el estudio en el plazo de seis meses, y dijo que los resultados de dicho estudio serían clasificados como confidenciales por un periodo de 10 años.

## La relación comercial entre EE.UU. y Andinos aun está en la balanza

A finales de marzo, se espera que el Congreso de EE.UU., envíe una propuesta de cómo abordar las cuestiones laborales en los ya firmados acuerdos de promoción comercial (APC) con Colombia y Perú.

Dichos APC, como el acuerdo concluido -- pero aun no firmado -- con Panamá, no serán enviados al Congreso para su aprobación, hasta tanto los Demócratas no hayan comprobado que su solicitud, de contar con disposiciones más severas en materia laboral y ambiental, haya sido tomada en cuenta. Los legisladores de ambos lados no lograron aun forjar un compromiso, la cuestión está ahora en manos de la Representante Comercial de EE.UU. Susan Schwab.

Un factor que agrava la situación, está relacionado la dificultad de definir los estándares laborales sin referirse explícitamente a las comúnmente llamadas ‘convenciones principales’ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los EE.UU., no han ratificado ninguno de esos instrumentos, no obstante sus leyes reflejen generalmente los estándares de la OIT.

El 13 de febrero pasado, 15 congresistas Demócratas, incluyendo la portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios Charles Rangel, y el presidente del sub-comité de comercio Sander Levin, enviaron una carta al presidente Bush solicitando que incorpore en todos los APC pendientes un “compromiso para adoptar y cumplir de manera efectiva los 5 estándares laborales reconocidos internacionalmente”. Como ejemplo podríamos citar: la prohibición del trabajo infantil y trabajo forzado, la no discriminación, y el derecho de los trabajadores a asociarse y negociar colectivamente.

Los demócratas deberán tomar en consideración la posición de los sindicatos, los cuales hicieron un llamado para que los textos de los APC incluyeran estándares internacionales obligatorios

en materia ambiental y laboral, “con los mecanismos eficaces de cumplimiento que proporcionen remedios y las penalidades equivalentes a aquellas que estén disponibles para las violaciones de las disposiciones comerciales”.

En materia de medio ambiente, 12 de los 24 demócratas pertenecientes al comité de medios y arbitrios, solicitaron a Susan Schwab incluir una “prohibición del comercio de madera - o sus derivados - producida o suministrada ilegalmente”.

*Grassley le dijo al Congreso: “Tal como van Bolivia y Ecuador, no veo la razón de extenderles los beneficios de las preferencias comerciales. No sería correcto tratar a las importaciones procedentes de Bolivia y Ecuador de la misma manera que a los productos de Perú y Colombia. ¿Por qué el Congreso debería estar en el negocio de recompensar los malos comportamientos?”*

Contrariamente, el antiguo presidente del comité de finanzas del Senado, Chuck Grassley, no ve la necesidad de reforzar las disposiciones laborales y medioambientales de los acuerdos. Por el contrario él está presionando fuertemente para que los APC sean enviados lo antes posible al Congreso. El senador Grassley ha elogiado a los gobiernos de Colombia, Perú y Panamá por haber demostrado que “ellos quieren lazos económicos más



## Reuniones OMC

Ginebra, Suiza

### Abril

23	Comité de Salvaguardias
24	Órgano de Solución de Diferencias
24-25	Comité de Prácticas Antidumping
26-27	Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
27-28	Grupo Especial para la solución de las diferencias 320 y 321
28	Órgano de Solución de Diferencias
30	Organismo de Examen de las Políticas Comerciales - Macao, China
30	Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio

### Mayo

1	Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio
2	Comité de Comercio y Medio Ambiente
7	Órgano de Examen de las Políticas Comerciales - Costa Rica
9	Consejo General
11	Comité de Comercio y Desarrollo - Sesión específica
21	Consejo del Comercio de Mercancías
22	Órgano de Solución de Diferencias
23	Órgano de Examen de las Políticas Comerciales - India
25	Comité de Comercio y Desarrollo

cercanos con los EE.UU. Necesitamos recompensar ese liderazgo. Deberíamos hacer eso a través de la implementación, lo antes posible, de nuestros respectivos acuerdos comerciales. Si no lo hacemos, le estaremos dando la espalda a nuestros aliados en la región”.

### ¿Cuáles son las posibilidades de una aprobación?

Muchos piensan que de aprobarse las ‘nuevas’ disposiciones laborales, se podrán conseguir los votos suficientes para aprobar los acuerdos con Perú y Panamá. No obstante, habrá mucha oposición por parte de los Demócratas que se oponen a los acuerdos de libre comercio en general y que buscan un cambio de dirección en la política comercial de los EE.UU. (ver nota relacionada en páginas 7 y 8).

Irónicamente, el acuerdo con Panamá -- que no ha sido firmado aún -- podría tener las mejores posibilidades, debido a que ofrece un acceso al mercado estadounidense más limitado que el de sus dos predecesores. Asimismo, ofrece nuevas oportunidades para las compañías norteamericanas interesadas en una porción de la gran torta que representa la expansión del Canal de Panamá, estimada en 5.25 mil millones de dólares. Panamá es el único país en haber aceptado la cláusula por la cuál, sólo los textiles y vestidos elaborados completamente en las fábricas de EE.UU. o Panamá, gozarán de arancel cero. Panamá también acordó eliminar restricciones que pesaban sobre el acceso a su mercado en varios sectores de servicios (ver nota relacionada en página...).

Por otro lado, el APC con Colombia tendría pocas probabilidades en el Congreso norteamericano, debido a la violencia que rodea a los sindicalistas en el país. Según la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, más de 3.000 líderes sindicales colombianos, activistas o miembros han sido asesinados desde 1985. De hecho el gobierno colombiano y el Banco Interamericano de Desarrollo están preparando un documento acerca de cómo el gobierno podría mejorar su capacidad para hacer cumplir las leyes laborales locales. Por su parte, algunos legisladores de EE.UU. han manifestado su preocupación respecto de alegaciones que confirman la existencia de conexiones entre los escuadrones de la muerte conformados por paramilitares de extrema derecha, y algunos congresistas pertenecientes al

partido del presidente Uribe. Un ministro del gobierno ya fue obligado a renunciar por esos cargos.

### Las preferencias andinas

Colombia y Perú, así como Bolivia y Ecuador gozan actualmente de preferencias para el acceso al mercado estadounidense, bajo la Ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés). Dicho sistema expirará en junio próximo, la administración Bush, así como la mayoría de los demócratas, están a favor de extender las preferencias a los cuatro países, en caso de que los APC no se hayan aprobado para tal fecha. No obstante, existen demócratas y republicanos que quieren que la ATPDEA no le sea renovada ni a Bolivia ni a Ecuador. Por ejemplo, el Senador Grassley le dijo al Congreso el 31 de enero: “Tal como van Bolivia y Ecuador, no veo la razón de extenderles los beneficios de las preferencias comerciales. No solamente le están denegando acceso a los mercados a los exportadores estadounidenses, ellos están comprometidos en nacionalizar industrias y expropiar bienes extranjeros. No sería correcto tratar a las importaciones procedentes de Bolivia y Ecuador de la misma manera que a los productos de Perú y Colombia. ¿Por qué el Congreso debería estar en el negocio de recompensar los malos comportamientos?”.

La pérdida de las preferencias afectaría de manera ostensible a las economías de Bolivia y Ecuador. El 64 por ciento (173 productos) del total de las exportaciones de Bolivia hacia EE.UU. se benefician de las preferencias de la ATPDEA; EE.UU. es el destino para el 80 por ciento de la producción boliviana de joyas, textiles y vestidos. En 2005, el valor del comercio de Bolivia, bajo la ATPDEA fue de 152 millones de dólares. Dicho monto representó el 62 por ciento del valor total de las exportaciones de Bolivia a EE.UU.<sup>1</sup> Por su parte, las exportaciones ecuatorianas bajo la ATPDEA en 2005 alcanzaron aproximadamente los 4 mil millones de dólares. Si bien el petróleo crudo y sus derivados representaron una gran porción de estas exportaciones, la pérdida de las preferencias podría tener un impacto significativo en el comercio y en el empleo de sectores como el textil y la producción de atún.

<sup>1</sup> El Acuerdo de “Largo Aliento” una propuesta de relacionamiento entre Bolivia y los EE.UU. Julio G. Alvarado, octubre 2006.



# Reglas de la OMC y políticas de energía sostenible

Yulia Selivanova\*

El interés por la regulación multilateral de energía y políticas de recursos naturales aumenta a medida que el crecimiento económico y la enorme disparidad geográfica entre la demanda y la producción incrementan el comercio y los precios del petróleo y el gas natural.

La energía no está distribuida equitativamente alrededor del mundo. El sesenta y nueve por ciento de las reservas de crudo conocidas están en manos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)<sup>1</sup>. Rusia, Noruega, México y Kazajistán, son los más grandes exportadores de petróleo fuera de la OPEP. En la mayoría de los países que no pertenecen a la OPEP los gobiernos por lo general tienen poco control sobre los niveles de producción debido a que las compañías privadas son las dueñas de sectores petroleros<sup>2</sup>, las cuales reaccionan de acuerdo a las señales de demanda que las conducen a explorar y extraer más cuando los precios se elevan.

Los altos precios estimulan a países que no pertenecen a la OPEP a producir petróleo convencional y no convencional<sup>3</sup>. Es posible que éstos tengan un impacto favorable en la ejecución de políticas para reducir la contaminación del aire y las emisiones de gas invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) y a mejorar la seguridad energética. Además, los elevados precios y el desarrollo tecnológico aumentan las oportunidades de fuentes de energía alternativas.

Por otro lado, el descenso abrupto de los precios del crudo entre 1998 y 1999 condujo a muchos países exportadores de petróleo a impulsar reformas económicas dirigidas hacia la diversificación de sus economías y a la reducción de su dependencia sobre el crudo. Es más, la adhesión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha proporcionado un impulso adicional a reformas nacionales en países productores de energía.

Existen mucho más recursos de gas natural que de petróleo. La mayoría de estas reservas se encuentran en el Medio Oriente (34% del total en el mundo), Europa y la antigua Unión Soviética (42% de la reserva total en el mundo). Por razones económicas y ambientales se proyecta que es posible que la demanda de gas natural aumente significativamente, ya que podría llegar a ser el combustible preferido de las industrias generadoras de energía.

*“debido a que las reglas de comercio y de cambio climático deben ser compatibles, es importante que las medidas sobre cambio climático sean llevadas a cabo de acuerdo a las reglas multilaterales de comercio”*

Los países exportadores de energía a menudo expresan preocupación argumentando que el alto consumo y los impuestos sobre consumos específicos a productos energéticos exigidos por los países importadores, reducen las ganancias derivadas de recursos finitos. Sin embargo, siempre que estos impuestos se apliquen de manera no discriminatoria, se mantendrán bajo las regulaciones de la OMC.

## La energía y la OMC

Las disciplinas específicas sobre comercio energético no formaban parte del GATT. Una de las posibles causas de esto es que en un principio los exportadores de energía no participaron de este acuerdo. El asunto estuvo muy politizado debido a la naturaleza estratégica de los productos energéticos, y a las prácticas estatales que afectan los recursos naturales y la energía han sido (y permanecen) sensibles y controversiales.

Las consideraciones de seguridad han estructurado en gran medida las políticas de comercio en el sector energético<sup>4</sup>.

Durante la Ronda de Uruguay algunos países procuraron introducir disciplinas específicas a ciertas prácticas de países exportadores de energía tales como precios diferenciados y las resultantes subvenciones, impuestos/restricciones a la exportación y aprovisionamiento discriminatorio. Estos intentos, sin embargo, no tuvieron éxito porque los países provistos de recursos se mostraron preocupados por las normas vinculantes de comercio en recursos naturales.

No obstante, comúnmente se acepta la aplicación de normas de la OMC ya existentes a productos energéticos, a pesar de que se puede argumentar que estas normas no son las más indicadas para resolver algunos problemas relacionados con el comercio en el sector energético. Tradicionalmente, las disciplinas de la OMC se han concebido de tal manera que están dirigidas en gran medida a las barreras de importación más que a las barreras de exportación. En el sector energético, sin embargo, las restricciones

a las exportaciones son las principales barreras comerciales.

Los impuestos de exportación sobre materiales y productos energéticos forman una parte importante de los ingresos de los países exportadores de energía. Los asuntos relacionados con las prácticas restrictivas de estos países, así como los relacionados con empresas energéticas monopolistas que disfrutan de derechos y privilegios exclusivos, no están sustancialmente considerados en normas las multilaterales de comercio, así como tampoco están los problemas de tránsito. Aun más, hace falta un marco comprensivo de inversión.

Han surgido interrogantes acerca de cómo debería ser ideada la implementación de medidas de cambio climático para que éstas no entren en conflicto con la normativa OMC. Por ejemplo, cómo implementar medidas de apoyo financiero brindado a los productores de energía renovable que sean compatibles con la normativa multilateral. El principio de trato nacional se aplica a los impuestos internos y cargas, leyes y regulaciones. Los impuestos internos a la materia y productos energéticos no pueden ser más altos que aquellos a productos “similares” producidos a nivel nacional. Las regulaciones técnicas y estándares que promueven el uso eficiente de la energía no pueden ser un obstáculo innecesario para el comercio.

### Impuestos a la energía

A los combustibles, la electricidad y las industrias consumidoras o procesadoras de materias primas que usan energía como insumos se les puede aplicar directamente los impuestos al dióxido de carbono y a la energía de acuerdo a la cantidad de emisión de dióxido de carbono o energía que se consume en la producción.

Surge la pregunta de que si los países en busca de objetivos ambientalistas pueden discriminar entre los productos energéticos que usan tecnologías amigables con el ambiente en su producción y aquellos que no utilizan tales tecnologías. La respuesta no es muy sencilla y es más complicada si los productos finales tienen características físicas idénticas y el mismo uso final, por ejemplo la electricidad generada por

energía nuclear o los recursos renovables. En este caso, sería difícil argumentar que los tipos de electricidad generados de forma diferente no son productos “similares”.

El sistema de solución de diferencias de la OMC se ha enfrentado a impuestos ambientalistas. El primer caso trata de una disputa entre las Comunidades Europeas (CE) y EE.UU. con respecto a un impuesto a los automóviles. La medida se introdujo para crear un incentivo para comprar automóviles de bajo consumo de combustible. Debido a que la medida afectaba a la mayoría de los vehículos europeos, las CE afirmaron que el impuesto era incompatible con el párrafo 2 del Artículo III del GATT (trato equitativo a productos nacionales e importados similares). El grupo especial encontró, sin embargo, que los automóviles de alto

*“debido a que las reglas de comercio y de cambio climático deben ser compatibles, es importante que las medidas sobre cambio climático sean llevadas a cabo de acuerdo a las reglas multilaterales de comercio”*

consumo de combustible importados no eran “similares” a los vehículos nacionales de bajo consumo de combustible. Por lo tanto, podrían ser tratados en condiciones menos favorables.

México, Canadá y las CE presentaron una acusación contra EE.UU. durante el caso *Superfund*. En este caso se trataba de un impuesto que EE.UU. le fijó al petróleo con la finalidad de financiar la limpieza de sitios con residuos peligrosos. No obstante el panel encontró que algunos aspectos de la medida de EE.UU. eran incompatibles con el Artículo III del GATT, éste reconoció la posibilidad de imponer impuestos ambientales nacionales.

### Ajustes a los impuestos fronterizos

Cuando un Estado con altos estándares ambientales establece impuestos sustanciales a la energía, los productos destinados a un consumo más eficiente de energía producidos en el país, llegan a ser menos competitivos que los productos extranjeros que no se someten a estas regulaciones. Por lo tanto, el país puede escoger el reembolso del impuesto tras la exportación. El gobierno también podría querer fijar impuestos adicionales a la importación de productos provenientes de países que no mantienen niveles altos de protección ambiental.

Las normas de la OMC no definen con claridad la elegibilidad para hacer algunos ajustes a los impuestos aduaneros. Conforme al Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias, los impuestos indirectos en cascada<sup>5</sup> se pueden eximir en la frontera cuando se le imponen a insumos que se utilizan en la elaboración del producto exportado, es decir, los insumos que se incorporen físicamente, como por ejemplo la energía, el combustible y el petróleo en el proceso de producción<sup>6</sup>. El ajuste no presenta un problema cuando el producto en sí, se exonera del impuesto energético o se reembolsa en la frontera. Sin embargo, existen opiniones divididas con respecto a si las normas de la OMC permiten que los impuestos a los insumos que no se incorporen físicamente al producto final puedan ajustarse. Por ejemplo, no queda claro si se puede ajustar un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono durante el proceso de producción.

### Subvenciones

El hecho de que en la actualidad ciertas fuentes de energía renovables no son comercialmente viables presenta un serio cuestionamiento a la compatibilidad de los diferentes esquemas de apoyo de la OMC.

Tales programas no pueden quedar sujetos a requisitos de exportación (estos quedarían bajo la categoría de subvenciones prohibidas). Las subvenciones específicas para ciertas empresas, industrias o grupos son consideradas recurribles y

los productos que se benefician de tales subvenciones pueden ser compensados. Como alternativa, un Miembro de la OMC podría pedir que se le retiren tales subvenciones si le causan perjuicios.

Limitar la subvención a los productores de energía renovable podría alcanzar los criterios de 'especificidad', por ejemplo, si un gobierno decidiera otorgar apoyo económico a las plantas productoras de energía renovable, este programa sería considerado específico; en otras palabras, sería una subvención recurrible.

El interrogante es cómo diseñar programas dirigidos a alcanzar objetivos ambientales sin que el apoyo financiero sea considerado como una subvención recurrible. Una posible solución sería encontrar criterios objetivos o condiciones que gobiernen la elegibilidad para una subvención, el monto de la subvención, hacer que la elegibilidad sea automática y que su cumplimiento se supervise con cuidado. Los criterios y condiciones deberían ser transparentes y claros. Por ejemplo, un posible criterio podría ser permitir un cierto nivel de emisión de dióxido de carbono durante la producción. Aunque por lo general es posible idear programas que incentiven el uso eficiente de la energía, es posible que los intentos por apoyar las industrias renovables caigan dentro de la categoría de subvenciones procesables.

## Regulaciones técnicas y estándares

Las regulaciones técnicas y estándares son herramientas importantes para incrementar el uso eficiente de la energía y para reducir las emisiones de gas invernadero (GHG).

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio prohíbe la discriminación a través de regulaciones técnicas. Es más, las regulaciones técnicas y estándares y los procedimientos de evaluación de conformidad no deberían crear obstáculos innecesarios al comercio ni ser utilizados como instrumentos proteccionistas.

El requisito de la no discriminación se aplica a 'productos similares', pero debido al debate continuo de cómo determinar la 'similitud', no está claro si los métodos de producción de energía podrían ser considerados como la base para la legítima diferenciación entre productos que usen más procesos eficientes de energía o menos de éstos.

## Conclusión

Las normas de la OMC se aplican en su totalidad al comercio de productos y materiales energéticos, aunque las mismas no hayan sido diseñadas específicamente para tratar asuntos relacionados con la energía. Por ejemplo, no está claro cómo las disposiciones relativas a la libertad de tránsito serían interpretadas por un grupo especial de la OMC en caso de una disputa. En empresas estatales, algunas prácticas restrictivas al comercio, aplicadas por compañías energéticas, no están amparadas por la normativa de la OMC. Sin embargo, debido a que las reglas de comercio y de cambio climático deben ser compatibles, es importante que las medidas sobre cambio climático sean llevadas a cabo de acuerdo a las reglas multilaterales de comercio.

---

\* *Yulia Selivanova es una experta que trabaja para the Energy Charter Secretariat en Bruselas.*

<sup>1</sup>A partir de enero de 2005. Esto incluye las reservas no convencionales canadienses. Al no incluir a Canadá, este cálculo que comparte la OPEP se incrementa a un 84 por ciento.

<sup>2</sup>México es una notable excepción; la constitución del país le otorga a PEMEX, la compañía de petróleo estatal, el monopolio de la producción del crudo.

<sup>3</sup>En Canadá, las arenas petrolíferas así como los yacimientos de petróleo en aguas profundas se han incrementado significativamente.

<sup>4</sup>Murray Gibbs. 2003. 'Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda' en *Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities*. UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)

<sup>5</sup> Impuestos exigidos por bienes y servicios utilizados directa o indirectamente en la elaboración del producto.

<sup>6</sup> Nota # 61 al pie de página del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

## Eventos

.....  
**30 de abril al 4 de mayo: 9TH SESSION OF WORKING GROUP III OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE -IPCC- AND 26TH SESSION OF THE IPCC** Lugar: Bangkok, Tailandia  
 Información: <http://www.ipcc.ch/meet/session26.htm>  
 .....

**30 de abril al 11 de mayo: 15TH SESSION OF THE COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT** Lugar: Nueva York, Estados Unidos  
 Información: <http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm>  
 .....

**2-6 de julio: CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO** Lugar: Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba  
 Información: <http://convencion.medioambiente.cu/relatoria.htm> Correo Electrónico: [convencion@ama.cu](mailto:convencion@ama.cu)  
 .....

**12-17 de agosto: SEXTO DIÁLOGO INTERAMERICANO SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA** Lugar: Guatemala  
 Información: <http://d6.iwrn.net/summary>  
 .....

**5-9 noviembre: III CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE DESARROLLO Y AMBIENTE** Lugar: Heredia, Costa Rica  
 Información: [www.una.ac.cr/redibec-cisda/](http://www.una.ac.cr/redibec-cisda/) [www.una.ac.cr/redibec-cisda/inscripcion](http://www.una.ac.cr/redibec-cisda/inscripcion), [cisda@una.ac.cr](mailto:cisda@una.ac.cr) Teléfonos: +506 277 3225, 277 3235 -277 3792 Fax: +506 277 3225  
 .....

## Brasil y Estados Unidos se unen para producir bio-combustibles

El 9 de marzo último, Brasil y EE.UU. –los dos mayores productores de etanol del mundo– sellaron un acuerdo para avanzar en la cooperación, investigación y en el desarrollo de bio-combustibles. El Acuerdo firmado durante la visita del presidente de los EE.UU., George W. Bush, a 5 países de América Latina describe a los bio-combustibles como “una fuerza transformadora en la región para diversificar fuentes de energía, aumentar el crecimiento económico, avanzar en las agendas sociales, y mejorar el medio-ambiente”.

A nivel bilateral, los dos países pretenden avanzar en la investigación y desarrollo de tecnologías para bio-combustibles de nueva generación, basados en materiales como las astillas de madera y la hierba “switchgrass”. Actualmente, la mayoría de los bio-combustibles producidos en ambos países son de primera generación, o sea, hechos a partir de: caña de azúcar en Brasil y de maíz en los EE.UU. Además, el acuerdo intenta promover la transferencia de tecnología hacia otros países que buscan producir el combustible. Este es el caso de algunos países de América Central y del Caribe.

A nivel global, los dos países prometieron crear un mercado internacional de bio-combustibles desarrollando patrones y códigos que estandarizarán la definición del etanol. La idea es que dicho producto pueda ser comercializado en los mercados internacionales de la misma manera que el petróleo, por ejemplo. Una semana antes, Brasil y EE.UU., junto con China, India, Sudáfrica y la Unión Europea, habían anunciado la creación de un Foro Internacional de bio-combustibles, para ayudar a desarrollar un mercado global para ese producto. Todos estos países son potencialmente grandes consumidores y productores.

El acuerdo entre Brasil y EE.UU. deja de lado la delicada cuestión de las tarifas de importación estadounidenses de etanol. El etanol producido en Brasil, obtenido

a partir de la caña de azúcar, es más barato que el etanol de maíz, hecho en los EE.UU.; el etanol brasileño es también más eficiente en lo que se refiere a las emisiones de gas de efecto invernadero. Sin embargo, además de enfrentar una tarifa ad valorem de 2.5%, los exportadores brasileños deben pagar también un arancel específico de 54 centavos de dólar por galón de etanol exportado a EE.UU. El acuerdo suscrito en São Paulo no abordó el tema de los aranceles ni de los subsidios. Al contrario, el acuerdo menciona que las cuestiones relacionadas con el comercio o los aranceles locales deberían ser tratadas en otros foros.

*“Algunos creen que la iniciativa norteamericana se constituiría en una oportunidad para minar la influencia de Venezuela, quinto exportador de crudo en el mundo, que últimamente ha logrado importantes acuerdos bilaterales con varios países de la región.”*

Gran parte de la prensa brasilera vio la iniciativa como un intento de crear una ‘OPEP para el Etanol’. No obstante funcionarios de ambas partes negaron el hecho de que su intención sea la de crear un cártel para fijar los precios de dicho producto. Más bien, parecería que el principal objetivo es la difusión de las tecnologías de producción de bio-combustibles. Por ejemplo, sólo una semana antes, Brasil había firmado un acuerdo con Indonesia en donde se comprometía a proveer asistencia técnica para producir etanol a partir de la caña de azúcar. Indonesia está intentando reducir su dependencia del petróleo a través de la revitalización de su sector agrícola.

### Para EE.UU. es una cuestión de seguridad

El presidente norteamericano había solicitado, durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión, la reducción en un 20% del consumo de gasolina en los próximos 10 años. Dicha reducción se haría por medio de la promoción de fuentes de gasolina alternativa y de una mejora en los estándares que regulan la eficiencia de los automóviles en el uso los combustibles. La

estrategia busca aumentar el suministro de combustibles renovables y alternativos a través del establecimiento de un límite obligatorio mínimo de producción de 35.000 millones de galones para 2017. Tal cantidad representa seis veces la producción de etanol de Brasil, quien debería aumentar su cantidad en aproximadamente 10 a 12 mil millones de litros en un periodo de 10 años. Asimismo, representa un aumento substancial en el actual objetivo de los EE.UU. que ronda en los 7.5 mil millones de galones para 2012 de dichos combustibles.

Algunos creen que la iniciativa norteamericana se constituiría en una oportunidad para minar la influencia de Venezuela, quinto exportador de crudo en el mundo, que últimamente ha logrado importantes acuerdos bilaterales con varios países de la región.

El subsecretario de Estado para asuntos de política, Nicholas Burns, había dicho al respecto “La energía ha tendido a distorsionar el poder de algunos de los Estados que consideramos negativos para el mundo -Venezuela, Irán-”.

No obstante, algunos expertos han advertido que la producción del bio-combustible podría acarrear problemas ambientales y sociales. En ciertos sectores se cuestiona el carácter “salvador y ecológico” del etanol porque implica seguir reproduciendo el modelo agro-exportador en países del tercer mundo, promoviendo el monocultivo y la deforestación. Se considera que no se han tomado en cuenta, sobre todo, cuestiones en torno a las áreas que se destinarán al cultivo de maíz, caña de azúcar u otras especies vegetales para la producción de etanol, y que estarán por consiguiente vedadas a la producción alimentaria. Desde el punto de vista económico, se ve problemático el hecho de que Brasil, para poder hacer frente a la demanda de etanol, destine ingentes recursos y esfuerzos sólo a la producción de este combustible. Ya consolidado como exportador número uno, se teme que caiga en un proceso de desindustrialización que como consecuencia genere una dependencia excesiva en la producción del combustible.



# La Agenda del Desarrollo de la OMPI avanza

Fleur Claessens \*

Establecer el desarrollo como tema central de las negociaciones de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) era el objetivo de la reunión celebrada por sus Estados Miembros. La tercera reunión del Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo (PCDA por sus siglas en inglés)<sup>1</sup> se dio en un ambiente de calma en comparación con reuniones anteriores de la PCDA, donde los Miembros estaban divididos tanto por la esencia como por el proceso.

La 'Agenda del Desarrollo' propuesta en 2004 por Argentina y Brasil apuntaba a hacer del desarrollo un elemento crucial de todas las negociaciones llevadas a cabo en la OMPI y en la determinación de políticas sobre la protección de la propiedad intelectual en general.<sup>2</sup> De acuerdo con el Grupo de 'Amigos del Desarrollo'<sup>3</sup> la OMPI, por ser una agencia de la ONU, debería guiarse completamente por los amplios objetivos de desarrollo que la ONU "se ha fijado para sí misma, en particular por los Objetivos de Desarrollo del Milenio" y tomar en cuenta todas las provisiones pro-desarrollo incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y las subsecuentes decisiones tales como la declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública. Argentina y Brasil tomaron la iniciativa de lanzar la agenda del desarrollo en 2004 y su propuesta fue rápidamente copatrocinada por 13 países en desarrollo. En particular, ocho naciones latinoamericanas apoyaron la propuesta de Agenda del Desarrollo.

La propuesta de Argentina y Brasil explica que a pesar de que se han hecho progresos científicos y tecnológicos significativos durante el último siglo, un desfase de conocimiento y tecnología mantiene separados a los países ricos de los países pobres. Ambos argumentan que es importante no ver la protección de la propiedad intelectual como un fin en sí mismo, ni tratar a todos los países por igual en la armonización de las leyes de propiedad intelectual, sino tomar en cuenta los diferentes niveles de desarrollo socio económico. La propuesta del Grupo de 'Amigos del Desarrollo' (GAD) identificó varias formas de lograr este objetivo, por ejemplo, propone lograr un tratado sobre acceso al conocimiento y a la tecnología, al enmendar la Convención de la OMPI para

incorporar la dimensión del desarrollo y reformar las normas y prácticas de la OMPI, que incluye el desarrollo de principios y directrices para el establecimiento de actividades normativas. A su vez motiva a una mayor participación de la sociedad civil en las negociaciones de la OMPI.

Cuando la Agenda del Desarrollo fue propuesta, los EE.UU. se opusieron a ella al argumentar que un programa de desarrollo de la propiedad intelectual que se base en la "asistencia técnica" que incluya la creación y fortalecimiento de los entes encargados de velar por la administración y cumplimiento de las normas de propiedad intelectual es suficiente. Ellos apoyaron la perspectiva de que leyes más fuertes de PI (Propiedad Intelectual) conducirían al desarrollo de beneficios para todos los países, sin importar su estatus económico. El GAD contra argumentó que el punto central debería ser la medición del impacto de las normas sobre propiedad intelectual en los países en desarrollo y que para que los países obtuvieran algunos beneficios por conceder leyes de propiedad intelectual, la transferencia y diseminación de tecnologías hacia los países en desarrollo deberían ser obligatorias. El GAD convenció a los Miembros de la OMPI a sostener una serie de reuniones intergubernamentales entre períodos de sesiones para analizar sus propuestas, solicitando amplios cambios en el mandato y funcionamiento de la Organización. Para este propósito se creó el comité provisional.

Las 111 propuestas<sup>4</sup> sometidas por los Estados miembros en los últimos tres años fueron reagrupadas en un documento<sup>5</sup> de trabajo elaborado por el embajador Manalo de Las Filipinas, en un intento por delimitar las propuestas, evitar repeticiones y separar las que requieren acciones concretas de las declaraciones de principios generales y objetivos. Además, en un intento

por facilitar el progreso, el documento de trabajo vinculó las propuestas con actividades existentes de la OMPI tales como sesiones de entrenamiento.

Las propuestas del anexo A se enfocan principalmente en la asistencia técnica y desarrollo de capacidades, establecimiento de normas, flexibilidades, políticas públicas y dominio público, transferencia tecnológica y acceso al conocimiento que incluye asuntos institucionales.

La más controversial de las propuestas del anexo A fue el núcleo B y en particular el asunto sobre la preservación del dominio público. Colombia expresó reservas sobre el asunto al argumentar que la propiedad intelectual no afecta el dominio público<sup>6</sup> dado que según su punto de vista la PI sólo crea incentivos para unos pocos inventos y creaciones y por ello el dominio público no necesita protección en el sentido tradicional de la propiedad intelectual. Otros países como Chile, Uruguay y Brasil pronto contra argumentaron a Colombia y se refirieron a la importancia del dominio público como una fuente de información para generar innovación y creatividad que lleva a nuevos derechos de propiedad intelectual. Muchas ONG y asociaciones de bibliotecas que estaban presentes en la reunión, rápidamente resaltaron la importancia del dominio público para mantener el balance entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de la sociedad a acceder a la información, la cultura y disfrutar del progreso científico. Además, Brasil argumentó que es demasiado temprano para que los países presenten objeciones porque los textos todavía no son definitivos.

Algunas delegaciones entre las que se incluyen la de EE.UU., Italia y los Países Bajos, y las ONG manifestaron que será más difícil llegar a un consenso

con respecto al Anexo B. Este es mucho más exigente en la parte de establecimiento de normas; por ejemplo, solicita que la OMPI adopte un instrumento internacional vinculante para proteger los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, que tome previsiones para la promoción de transferencia de tecnología; y que recopile mejores prácticas para el crecimiento económico en relación con el desarrollo de las industrias creativas y para atraer inversión extranjera. Entre las propuestas sobresalientes se encuentran la recomendación de incluir previsiones de trato especial y diferenciado para países en desarrollo y países menos adelantados. El Anexo B se centra, en particular, en el acceso al conocimiento, en contraste con el enfoque tradicional de la OMPI sobre derechos de propiedad intelectual.

Argentina en nombre del GAD arguyó que algunas de las actividades enumeradas en el documento de trabajo sólo se dan cada vez que son necesarias y que les gustaría que se institucionalizaran. El GAD cree que el ejercicio de las negociaciones de la agenda del desarrollo le ayudará a la OMPI a convertirse en una organización dirigida por sus Miembros. El Grupo señaló que todavía hay muchas propuestas que son declaraciones de principios y objetivos generales. En la práctica es difícil darle seguimiento a estas propuestas en contraste con propuestas que requieren acciones concretas. Algunos ejemplos de estas propuestas son el establecimiento de un fideicomiso o un fondo de donativos para facilitar la asistencia técnica a países menos adelantados, permitir a las oficinas nacionales de países en desarrollo el acceso a bases de datos especializadas con el propósito de búsqueda de patentes, y la creación de una página en Internet que contenga información sobre asistencia técnica proporcionada por la OMPI. Un ejemplo de una declaración de principios y objetivos generales es la propuesta de tomar en consideración los diferentes niveles de desarrollo de varios países para diseñar, dar y evaluar la asistencia técnica.

Pakistán, a nombre del grupo asiático insistió en la importancia de que los países adquieran el espacio de políticas preciso para enfrentarse a las necesidades del desarrollo. En particular, identificaron tres grupos que son motivo de preocupación:

1) El impacto de la propiedad intelectual sobre los precios de productos esenciales,

programas informáticos educativos, productos farmacéuticos esenciales y libros de texto educativos.

2) El acceso a la tecnología se ha hecho difícil debido a la existencia de patentes, al período de protección, a la poca divulgación de información, y a los fondos de patentes.

3) La persistente malversación del conocimiento tradicional y de recursos genéticos.

Sudáfrica también expresó que una agenda del desarrollo sólida podría crear un mayor balance en el sistema de propiedad intelectual. Dicho país sostiene que se deben recoger experiencias de las lecciones del pasado e indicó que los países que en la actualidad son altamente industrializados llegaron a esa etapa porque escogieron un camino de desarrollo económico hecho a la medida. Japón también destacó que para ellos el uso del sistema de propiedad intelectual había contribuido a su desarrollo económico. Argumentó que la protección a la propiedad intelectual es un ciclo dinámico que involucra la creación, la protección y la explotación. Corea del Sur apoyó a Japón y reconoció la importancia de la propiedad intelectual para los países en desarrollo y los países menos desarrollados. Ambos países ofrecieron compartir sus conocimientos en este proceso.

Canadá manifestó que los Miembros estaban contentos por haber alcanzado un terreno común en la agenda del desarrollo.

Durante la tercera sesión del PCDA, EE.UU. expresó su compromiso con la Agenda del Desarrollo y señaló que hasta la fecha se han logrado mejoras. Hizo referencia al informe de la Asamblea General de 2005, el cual indicaba que las negociaciones de la OMPI están en función de la demanda y que el apoyo al desarrollo ha crecido, prueba de esto es el consenso por una mejora en el presupuesto y por una exigencia de transparencia en todas las reuniones.

La delegación de EE.UU. parecía estar de acuerdo con casi todo el texto preparado por el Presidente, sin embargo sostuvo que es muy posible que los países no lleguen a un acuerdo sobre las 111 propuestas. Por ejemplo el propio EE.UU. no estuvo de acuerdo con la redacción de una propuesta que 'aseguraba' la transferencia y diseminación de tecnología a todos los países en desarrollo; ellos creen que

son los países en desarrollo quienes deberían decidir si tienen o no necesidad de transferencia de tecnología y que no sea la OMPI quien la recomiende. Argumentó que no sólo el país desarrollado es el que debe adoptar políticas y medidas para apoyar la transferencia de tecnología sino que en algunos casos los países en desarrollo podrían compartir su pericia técnica. Los EE.UU. se refirieron al exitoso 'proyecto espacial' brasileño. Además creen que son los mismos países quienes deben decidir si quieren o no usar las flexibilidades existentes, ya que pueden existir compañías que no deseen usarlas. Tendría inconvenientes en aceptar la naturaleza vinculante de las propuestas.

Durante la tercera sesión del PCDA, los grupos africano y asiático le dieron su apoyo a las iniciativas del GAD.

Kamil Idris, Director General de la OMPI, dijo que estaba muy satisfecho con los resultados de las discusiones y esperaba que este espíritu de compromiso y mutua comprensión persistiera en futuras negociaciones. Subrayó que la "protección a la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino que debe servir un interés social y económico más amplio. Los derechos de los inventores y creadores tienen que estar equilibrados por consideraciones más amplias de bien para la sociedad".

En resumen, contrario a las sesiones previas, la tercera sesión del PCDA fue más constructiva. En junio las discusiones fundamentales sobre el documento de trabajo continuarán durante la cuarta sesión del PCDA con el objetivo de presentar ante la Asamblea General un conjunto de recomendaciones de cómo proceder ante la Agenda del Desarrollo.

---

\* La autora es Oficial del Programa sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible de ICTSD.

'Avanza en forma significativa la labor de los Estados miembro respecto de un programa de la OMPI para el desarrollo,' Comunicado de Prensa de la OMPI PR/2007/478, Ginebra 26 de febrero de 2007

'Avance significativo en la Agenda del Desarrollo de la OMPI,' Puentes Quincenal, 6 de marzo de 2007

'Asamblea General de la OMPI encuentra manera de avanzar en el tratado sobre difusión, Agenda de Desarrollo,' *Bridges Weekly*, 4 de octubre de 2006.

<sup>2</sup> Miembros de la OMPI se encuentran más cerca de delimitar el texto sobre desarrollo', *Intellectual Property Watch*, 22 de febrero de 2007

<sup>3</sup> 'Avanza de forma significativa la negociación sobre el Programa de la OMPI para el Desarrollo', *Intellectual Property Watch*, 6 de marzo de 2007

Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo, Tercera sesión, Ginebra, 19 al 23 de febrero de 2007, PCDA3/2

<sup>1</sup> El mandato para la reunión fue suministrado por la Asamblea General de la OMPI, la instancia de mayor autoridad de la OMPI quien decidió que la PCDA sostendría dos sesiones de cinco días para analizar a profundidad las 111 propuestas previo a la celebración de la Asamblea General del 2007.

<sup>2</sup> Propuesta por Argentina y Brasil para el establecimiento de una Agenda Desarrollo para la OMPI, Trigésima Primera (XV Sesión Extraordinaria). Ginebra, 27 de septiembre al 5 de octubre de 2004, WO/GA/31/11, 27 de agosto de 2004.

<sup>3</sup> El llamado grupo de 'Amigos del Desarrollo' consta de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, La República Islámica de Irán, Kenia, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, La República Unida de Tanzania, Uruguay y La República Dominicana. El grupo de 15 miembros, todos ellos países en desarrollo, hace un llamado por amplios cambios para integrar los objetivos de desarrollo de la ONU en todos los aspectos del mandato y funcionamiento de la OMPI.

<sup>4</sup> La Reunión Intergubernamental entre períodos de Sesiones (IIM) fue creada durante la Asamblea General del 2005 para examinar la propuesta de Agenda Desarrollo. Durante sus tres sesiones en el 2004 y el 2005, otros países – los EEUU, el Reino Unido, Bahrein y otros países Árabes y el grupo Africano – presentaron propuestas de desarrollo al atacar asuntos tales como asistencia técnica y cómo eliminar la brecha digital. La PCDA fue creada en la Asamblea General celebrada en el otoño de 2005 y su mandato fue renovado durante la Asamblea General del 2006.

<sup>5</sup> El documento de trabajo recopila las 111 propuestas subdivididas en Anexo A y B. La reunión de febrero de 2007 apuntó a avanzar en las primeras 40 propuestas recopiladas en el Anexo A, la reunión de la PCDA de junio de 2007 está planeada para analizar el Anexo B que contiene las 71 propuestas para someter a la Asamblea General un conjunto de recomendaciones basadas en un texto de propuesta manejable. E. Manolo (Las Filipinas) circuló el documento de trabajo como fue ordenado por la Asamblea General de la OMPI en octubre del 2006: Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo, Tercera Sesión, Ginebra, 19-23 de febrero de 2007, OMPI PCDA/3/2 20 de febrero de 2007.

<sup>6</sup> Dominio público se refiere a trabajos que nunca fueron protegidos o que ya no están dentro del período de protección de las leyes de propiedad intelectual aplicables.

## Construyendo un régimen internacional de distribución justa de beneficios; ¿cómo valorar los recursos genéticos?

Pablo Bifani \*

### Acceso y participación en los beneficios<sup>1</sup>

Uno de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es "... la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos" "...mediante entre otras cosas, un acceso ... a esos recursos y una transferencia ... de las tecnologías pertinentes". Luego de 15 años de vigencia del Convenio este objetivo no se ha materializado, suele tergiversarse o es simplemente ignorado. La bibliografía en la materia es muy escasa, y por lo general los pocos artículos son sesgados hacia el asunto del acceso con mínimas consideraciones sobre la participación en los beneficios<sup>1</sup>.

Tanto las Guías de Bonn como el trabajo sobre Acceso y Distribución de Beneficios (ADB) y de la Conferencia de las Partes se concentran en el acceso a los recursos genéticos ignorando la distribución de beneficios, no establecen medidas específicas para los usuarios de recursos genéticos en los países desarrollados (farmoquímica y semillas) y las escasas propuestas no son vinculantes (Guías de Bonn). El debate se orienta acorde con los intereses de los países desarrollados usuarios de recursos genéticos en menoscabo de los intereses de países en desarrollo, ricos en diversidad biológica y recursos genéticos. Se discuten y elaboran propuestas de leyes y mecanismos para el acceso a los recursos genéticos pero nada se dice, discute o analiza sobre la repartición de los beneficios que se deriven del acceso a, y uso de dichos recursos. La transferencia de tecnología es totalmente ignorada.

El debate, predominantemente legal, se centra en el tema del acceso, que parece haber dejado de ser un "...medio..." entre otros para el logro de los objetivos para transformarse en objetivo en sí mismo. Las dimensiones económicas implícitas en el objetivo están ausentes. Definir formas, leyes y mecanismos legales que regulen el

acceso a los recursos genéticos en ausencia de la valoración económica de estos últimos es posible; pero una cosa muy distinta es identificar y establecer mecanismos para la distribución justa y equitativa en los beneficios que derivan de su uso si se desconoce su valor económico. Al escaso interés por discutir la *participación en los beneficios* se añaden las dificultades de asignar valor al germoplasma y determinar su contribución al valor de los bienes a los cuales él se integra o contribuye a crear, sean estos fármacos, vacunas, alimentos, semillas, cosméticos etc.

### Antecedentes históricos

Durante milenios la humanidad ha utilizado recursos genéticos: en agricultura, alimentación, medicina, farmacopea, etc. La gestión del material genético es intrínseca a la selección tradicional de cultivos, la hibridación, la fermentación de cervezas, yogures y quesos, la producción de vinos, la selección de plantas medicinales, la elaboración de comidas tradicionales, etc. Estas actividades y sus procesos explotan las propiedades de micro-organismos, bacterias y organismos jamás considerados como insumos comerciables en los procesos de producción. Fueron siempre considerados como bienes gratuitos, nunca han tenido un valor de mercado (precio). El advenimiento de la moderna biología molecular, la ingeniería genética y la moderna biotecnología acrecienta enormemente la importancia del material genético para uso en: agricultura (aumentos de productividad, resistencia a plagas, tolerancia química y ambiental), protección agrícola (plaguicidas, herbicidas, etc.), farmoquímica, cosmética, sanidad, degradación residuos y la limpieza de áreas contaminadas, generación de energía, lixiviación *in situ* de minerales, etc.

La lucha por la apropiación de los recursos genéticos es una constante histórica. Se suele citar a la Reina Hatsheput que enviaba en el 1500 AC (hace 3500 años) expediciones a Punt, (Somalia) en busca de especies, hecho histórico inmortalizado en los bajos relieves de Deir-El-Bahir.



Las políticas de apropiación de material genético de los EE.UU. se iniciaron con Benjamin Franklin en 1770 y su sucesor Thomas Jefferson. Se oficializó en la famosa circular del presidente John Quincy Adams de 1827, complementada con la creación de invernaderos de aclimatación que culminan con la del Missouri Botanic Garden. Se fortalece por el decreto del presidente Lincoln de 1862 que al crear la Secretaría de Agricultura especifica entre sus responsabilidades "...para recoger nuevas semillas y plantas de valor..."; y más tarde con la Plant Patent Act (1930), la Plant Protection Variety Act (1970), la creación del National Plant Germoplasm System en 1974 y el National Seed Storage Laboratory en Fort Collins<sup>2</sup>.

### Los recursos genéticos: ¿bienes gratuitos o recursos? ¿Qué valor tiene el material genético?

Si bien objeto de constante apropiación, el material genético nunca fue considerado como recurso, ni existió ni existe un mercado, y por lo tanto un precio para dicho material. Asimismo, la movilidad internacional de estos recursos no ha tenido costos y jamás han enfrentado barreras comerciales, por consiguiente no ha habido compensación económica para los países proveedores o de origen. Esta situación subsiste aún cuando hoy se le considere un recurso (Art. 2; 3; 9 y 10 de la CDB y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura -TI-RFAA-).

La gratuidad del germoplasma y su prácticamente irrestricto acceso se asoció a la idea de "bien común de la humanidad" y de "libre acceso", idea que se contradice con el concepto de recurso y escamotea su valor económico, siendo resistida por los países ricos en recursos genéticos. La controversia motivó la sustitución, por el Consejo de FAO, de la expresión "patrimonio común" de la humanidad por "preocupación común" especificando que libre acceso no implica ausencia de precio o de costo (Art. 5 y Anexo I de la Resolución 4/89 de la Conferencia de la FAO).

Pero ¿cuál es el valor del material genético? En el debate ha primado el enfoque

ecologista-cum-conservacionista centrado en la valoración de la biodiversidad lo que ha llevado a una confusión conceptual entre valor de la diversidad biológica y valor de sus componentes: es decir, los recursos genéticos. Confusión explotada por los interesados en evitar la valoración económica de los últimos. El enfoque tradicional distingue entre el valor de uso y el valor de no-uso de la biodiversidad. El primero incluye valores directos e indirectos. El valor de no-uso es aquel que no está relacionado con el consumo presente de sus componentes, sino que con el consumo futuro y es de tres tipos: de opción, de herencia o legado y de existencia o pasivo. Este enfoque refleja la preocupación por la erosión de la biodiversidad. Pero, para los fines de distribuir los beneficios que resulten del uso del material genético pareciera necesario examinar el tema del valor en forma más precisa. Es esencial distinguir el valor de la diversidad biológica como totalidad (enfoque ecologista) del valor de cada uno de los diversos componentes de la diversidad biológica<sup>3</sup>. El primero

*"Para los propósitos de distribución de beneficios pareciera más correcto definir el valor de la biodiversidad en función del creciente valor comercial de los recursos genéticos individualmente considerados y definidos como «material genético de valor real o potencial...»"*

corresponde al valor de conservar la biodiversidad por su valor intrínseco como totalidad opuesto al de uniformidad u homogeneidad.

Para los propósitos de distribución de beneficios pareciera más correcto definir el valor de la biodiversidad en función del creciente valor comercial de los recursos genéticos individualmente considerados y definidos como «material genético de valor real o potencial...» (Art.2 de la CDB). Hoy los recursos genéticos involucran apuestas económicas importantes y su apropiación es uno de los temas más controvertidos en las relaciones económicas internacionales. La biotecnología y la creciente capacidad para identificar e incorporar material

genético exótico en productos comerciales han aumentado los esfuerzos en su bio-prospección y apropiación.

Valorizar económicamente el material genético es difícil. La mayoría de estos recursos son intangibles o de difícil apropiación, por lo general no existen mercados para ellos y si existen son extremadamente imperfectos.

La apropiación práctica y efectiva del material genético o más específicamente de la información contenida en él es otro escollo. Una solución ofrecida podría ser el establecimiento de un sistema de propiedad intelectual que garantice que el uso de la información genética sea objeto de restricciones, previamente establecidas, que permitan capturar los beneficios derivados de su utilización. Definir un régimen de propiedad para los recursos genéticos es complejo ya que tienen un componente tangible y otro intangible. Esta última es la que confiere valor a los recursos genéticos. Esta distinción es fundamental y afecta, entre otras cosas, la participación en los beneficios resultantes del uso de los recursos genéticos. Estos son demandados por su componente genético o "...unidades funcionales de herencia", es decir por aquellos elementos que contienen ADN (eventualmente ARN). Pero puede suceder que el propietario del componente material, física o tangible del recurso genético no lo sea de la componente intangible<sup>4</sup>.

Es opinión difundida en los países desarrollados que el material genético adquiere valor una vez que se ha invertido en él para permitir su uso<sup>5</sup>.

Sería la combinación germoplasma, conocimiento y capacidad científico-tecnológica la que confiere valor al material genético y que este por sí sólo carece de valor económico.

### Valor de los recursos genéticos y participación en los beneficios de su uso

El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO (TI-RFAA) es el primer instrumento internacional que aborda el tema de la distribución justa y equitativa de los beneficios que resultan del uso de los recursos genéticos al adoptar el concepto de FAO de los derechos del agricultor: "...permitir a los agricultores, sus comunidades y países ..., participar



plenamente de los beneficios que se deriven, en el presente y en el futuro, del uso mejorado de los recursos fitogenéticos ....». (Resolución 5/89 de la Conferencia de la FAO).

La participación en los beneficios se basa en la reciprocidad entre los países adherentes al Tratado (Resolución 4/89 de la Conferencia de la FAO), en un Sistema Multilateral para facilitar el acceso y la participación en los beneficios y cuyo instrumento son contratos standard de transferencia de material genético, aplicables también a todas las transferencias sucesivas de ese material (TI-RFAA, Parte IV). El certificado de origen-legal de procedencia-fuente que suele ser mencionado como un elemento central de todo régimen en la materia, es importante para definir legalidad en el acceso pero no garantiza, ninguna forma de distribución de los beneficios que puedan derivarse del uso.

En general dos consideraciones estratégicas motivan crecientes esfuerzos de bio-prospección y apropiación de recursos genéticos:

- La búsqueda estratégica general por nuevos elementos o recursos;
- La búsqueda especializada, con objetivos precisos, de nuevo material genético para satisfacer necesidades específicas en diferentes sectores de la actividad socio-económica y que justifica la colección de recursos genéticos claramente definidos, aún de aquellos aparentemente marginales o periféricos pero de uso potencial.

En todos los casos se desconoce el valor monetario del recurso bio-prospectado. Los intentos de asignar un valor monetario al material genético no han sido sistematizados, son especulativos, indirectos y *ex-post*. A modo de ejemplo podemos decir que el germoplasma de variedades de tomates del Perú aumentaron el contenido soluble del tomate cultivado en EE.UU. con beneficios netos anuales de US\$ 5 millones<sup>6</sup>. Las variedades de soja desarrolladas por la Universidad de Illinois utilizando germoplasma proveniente de Corea ahorran a la industria norteamericana entre US\$ 100 millones y US\$ 500 millones anuales en los costos de procesamiento<sup>7</sup>. El ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher, al solicitar al Congreso la ratificación del CDB, señalaba que la contribución del germoplasma extranjero a dos cultivos norteamericanos, maíz y soja, era de US\$ 10.2 mil millones

al año<sup>8</sup>. Demás está decir que los países de origen no han participado de estos beneficios.

Otros esfuerzos de valoración han abordado el problema desde tres perspectivas:

- Indirectamente, a través del mercado de drogas y fármacos, semillas, pesticidas, productos de salud, cosméticos, plantas ornamentales y productos biotecnológicos para los cuales los recursos genéticos son un insumo fundamental;
- Cuando existe un mercado en el cual se transan en forma más o menos regular por el valor de las especies, y sus variedades, extractos, componentes activos, comercializados;
- En el caso de drogas, fármacos, medicinas por el análisis de sus valores en términos de propiedades terapéuticas.

Si bien los esfuerzos por valorizar económicamente los recursos genéticos han sido especulativos, ellos proporcionan indicios útiles de las magnitudes involucradas. Las estimaciones del mercado mundial de productos derivados u obtenidos a partir de recursos genéticos fluctúan entre US\$ 500 mil millones y US\$ 800 mil millones anuales. Ellas incluyen el uso de recursos genéticos en agricultura, farmacéutica, otros usos biotecnológicos, etnomedicina, plantas ornamentales, protección de cultivos, cosmética y perfumería.

## Reflexiones sobre el qué hacer

Reconociendo que el tema representa un gran desafío para los países en desarrollo por las dificultades de la negociación que resultan, entre otras cosas, de su complejidad, de la ausencia de metodologías e instrumentos adecuados y de los intereses económicos en pugna, es posible aventurar algunas sugerencias.

- Los países en desarrollo deberían asumir mayor iniciativa y sobre todo identificar cuales son los elementos del Art.1 de la CDB (Objetivos), relevantes para los países en desarrollo y orientar la negociación de conformidad con ello: no sólo acceso, también participación en los beneficios y transferencia de tecnología.
- Realizar internamente esfuerzos de investigación y de metodologías para abordar el tema de la valoración. Algunos países megadiversos tienen gran capacidad científica en este terreno (India, Brasil, México, por citar algunos).

- Evaluar el costo de las medidas que se adopten (ej.: adaptación y adopción de nuevos instrumentos legales, administrativos).

- Negociar obligaciones vinculantes que sean equilibradas en el sentido que ambas partes tengan el mismo grado de obligatoriedad y no que una de ellas vea reducida su responsabilidad al condicionarla a situaciones contingentes o que estas obligaciones sean del tipo “*best efforts*” o de buenas intenciones.
- Establecer sinergias con el TI-RFAA y trabajar en forma coordinada con otras negociaciones internacionales relacionadas (ADPIC, conocimiento tradicional, etc.) tanto en la OMC como en FAO, OMPI etc.

\* El autor es un experto en desarrollo, comercio internacional, tecnología y propiedad intelectual, medio ambiente y biodiversidad. Se desempeñó como funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como para la Comisión Económica para América Latina. Actualmente es consultor para distintos organismos internacionales y gubernamentales.

<sup>1</sup> Han habido iniciativas relacionadas con este objetivo en el marco del CDB y fuera del mismo. Entre las primeras están las negociaciones para un Régimen Internacional de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios y las Guías de Bonn sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios. Entre los segundos está la creación, de la iniciativa de México, del Grupo de Países Megadiversos Afines, que impulsó el párrafo 42(o) del plan de Acción de Johannesburgo que propugna el establecimiento de un régimen internacional para la promoción y salvaguardia efectiva de la distribución justa y equitativa de los beneficios. Preocupación recogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que invita la Conferencia de las Partes de la CDB a tomar las medidas necesarias para negociar dicho régimen (Res. 57-260 (20.12.2002).

<sup>2</sup> Estas estrategias se han examinado en el Capítulo VI: “Globalización y medio ambiente: el caso de la diversidad biológica” del libro: “La Globalización”: ¿otra caja de Pandora?; P. Bifani. U. de Granada 2002.

<sup>3</sup> Bifani Paolo, 2001. CARICOM Interests in Relation to Biodiversity and Intellectual Property Rights in the Context of Multilateral Negotiations with Special Emphasis on the FTAA. CRNM/IDB. Barbados and Washington. D.C.

<sup>4</sup> Bifani Paolo, 2001. CARICOM. Op.cit

<sup>5</sup> Pioneer Hi-Bred International 1984 Conservation and utilization of exotic germplasm to improve Varieties. Des Moines. IA,

<sup>6</sup> Iltis, Hugh. 1981 Discovery of N 832: an essay in defense of the National Science Foundation. Desert Plants 3-4 Winter 175-192

<sup>7</sup> Diversity 1986 News in Brief .9 39-41.

<sup>8</sup> Warren Christopher. Letter to the US Congress dated 16.08.1994

# Las negociaciones internacionales sobre la revelación del origen en solicitudes de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI): avances y perspectivas

Jorge Cabrera Medaglia \*

Una de las primeras medidas sugeridas para lograr una relación sinérgica entre la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y los sistemas de propiedad intelectual ( en particular el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio ADPIC-OMC) fue la revelación del origen de los recursos genéticos o el conocimiento tradicional asociado en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente patentes. Desde hace varios años en el seno del CDB, en la OMC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI- y en numerosas actividades e Informes se ha venido insistiendo en la necesidad de impulsar la revelación del origen en solicitudes de DPI.

Las Conferencias de las Partes del Convenio también han abordado la relación entre DPI y biodiversidad. La Resolución VI/24/C 1 “El papel de los DPI en la implementación de acuerdos de distribución beneficios”: invita a los gobiernos y Partes a promover la revelación del origen de los recursos genéticos en aplicaciones de derechos de propiedad intelectual, cuando la materia protegida consista o haga uso de recursos genéticos en su desarrollo, como una posible contribución al rastreo del cumplimiento del consentimiento informado previo y las condiciones mutuamente acordadas bajo las cuales el acceso a esos recursos fue otorgado. El numeral 2 contempla la misma invitación en términos de conocimiento tradicional asociado. En la VII Conferencia de las Partes, la Decisión VII/ 19 solicita al Grupo de Trabajo sobre Acceso a Recursos Genéticos identificar los aspectos relativos a la revelación del origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociados en las solicitudes de DPI, incluyendo aquellas relativas al certificado de origen/fuente/legal procedencia. Igualmente las Guías de Bonn sobre Acceso a Recursos Genéticos (aprobadas en la VI Conferencia de las Partes) contienen una referencia al tema al indicar que, como parte de las medidas en países usuarios, se deben considerar medidas para promover la revelación del origen de los recursos genéticos y del origen de los conocimientos, innovaciones y prácticas en solicitudes de derechos de propiedad intelectual (16.d.ii).

## La negociación de un régimen internacional (RI) y sus implicaciones para los DPI

El Plan de Acción de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en su párrafo 44, considera la negociación de un régimen internacional que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución justa y equitativa de beneficios.

La VII Conferencia de las Partes, acordó iniciar dichas negociaciones. Entre otros aspectos la Decisión VII/19 reconoce como uno de los elementos del Régimen Internacional: xiv) la revelación del origen/fuente/legal adquisición de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado. Igualmente, el punto E (medidas para apoyar el cumplimiento del consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados bajo los cuales el acceso se concedió, sección conocida como Medidas de Países Usuarios), establece la necesidad de abordar aspectos como la revelación del origen como mecanismos para apoyar el cumplimiento de la legislación de acceso y el consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados.

La VIII Conferencia de las Partes del CDB se reunió en Curitiba, Brasil para analizar el tema del RI, el cual ocupó uno de los aspectos centrales del debate. Si bien es cierto fundamentalmente se discutieron aspectos de proceso y no sustantivos, algunos temas de interés

fueron acordados. Por medio de la decisión VIII/4 se decide transmitir el Anexo al Grupo de Trabajo sobre Acceso a Recursos Genéticos en su quinta reunión para que, de conformidad con la Decisión VII/19, continúe la elaboración de un RI.

Entre los elementos del Anexo, contemplados bajo el título distribución justa y equitativa de beneficios, se incluye la revelación del origen o fuente en solicitudes de DPI que hagan uso o consistan en recursos genéticos y conocimiento tradicional (CT) incluyendo evidencia del cumplimiento de la legislación del país proveedor en materia de consentimiento informado previo (PIC) y distribución de beneficios, entre otros.

En el Acápite D de la Decisión VIII/4 - Medidas para apoyar el cumplimiento con el PIC y los TMA de las Partes proveyendo recursos genéticos en las Partes con usuarios de tales recursos genéticos en su jurisdicción-, se reafirma que la revelación del origen en solicitudes de DPI constituye un elemento de los términos de referencia del Anexo a la Decisión VII/19 D para la elaboración del RI. Se reconoce que el tema ha sido tratado en la OMPI y en la OMC, y se invita a los foros relevantes a abordar (o continuar) el tema de la revelación del origen en solicitudes de DPI, considerando la necesidad de asegurar que el trabajo apoya y no contraviene los objetivos del CDB. Se requiere al Secretario Ejecutivo a renovar su solicitud de acreditación como observador ante el Consejo del ADPIC.

## La revelación del origen en la Organización Mundial del Comercio

La Declaración de Doha que lanza la actual Ronda de Negociaciones Comerciales ( párrafo 19) encomienda específicamente al Consejo del ADPIC que al llevar adelante su programa de trabajo, incluso en el marco del examen previsto en el párrafo 3 b) del artículo 27, del examen de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC previsto en el párrafo 1 del artículo 71 y de la labor prevista en cumplimiento del párrafo 12 de la Declaración, examine entre otras cosas, la relación entre el Acuerdo de los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folklore, y otros nuevos acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros de conformidad con el párrafo 1 del artículo 71. Al realizar dicha labor, el Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá en cuenta plenamente la dimensión del desarrollo.

En la OMC se ha discutido el tema de la revelación del origen en solicitudes de DPI, basados en el mandato establecido en Doha. Las principales posiciones de los diferentes grupos o países pueden sintetizarse la siguiente forma:

- El Grupo Africano ha propuesto la eliminación de las patentes sobre formas de vida en el contexto del ADPIC. Igualmente afirman que debe incluirse la revelación del origen en solicitudes de DPI.
- Los Estados Unidos, en alguna medida con el apoyo de Japón y Corea, se ha opuesto a esta modificación y a incluir en la revelación del origen, por considerar que no resolvería los problemas derivados de la apropiación indebida de recursos genéticos y conocimiento tradicional y ocasionaría incertidumbre y problemas prácticos en el funcionamiento de los sistemas de DPI. Por el contrario, se muestran favorables a mejorar la calidad del proceso de otorgamiento de patentes, al establecimiento de bases de datos de búsquedas y otros mecanismos que permitan eliminar los problemas asociados a las "malas patentes", utilizar sistemas de nulidad y revocación existentes, etc. No consideran que exista un conflicto entre el ADPIC y el CDB y,

por el contrario, ven la solución en el fortalecimiento de las leyes de acceso y el uso de contratos como medios para evitar la apropiación indebida.

- Suiza ha propuesto modificar PCT (debido a que considera a los requisitos de revelación del origen de naturaleza formal y no sustantiva) y sus regulaciones para permitir-no obligar- a los países a incluir la revelación de la fuente de los recursos genéticos en solicitudes de DPI basadas directamente en esos recursos.
- Los llamados "Amigos de la revelación" un grupo de países en desarrollo que incluye a Brasil, China, Cuba, República Dominicana, Ecuador, India, Kenia, Pakistán, Perú, Tailandia, Venezuela, Zambia, Zimbabue y

*"Aún en los casos de detección de usos inapropiados, cabe cuestionar la capacidad económica y financiera para poder invalidar las patentes en jurisdicciones foráneas, proceso costoso y largo"*

apoyada ocasionalmente por otros países, ha expresado que el ADPIC y la CDB deben apoyarse mutuamente. Por tal razón sugieren modificar el ADPIC. Argumentan que mediante el patentamiento de recursos biológicos pueden permitirse actos de biopiratería o apropiación indebida, en detrimento del reconocimiento de la soberanía nacional establecido en el CDB. Indican además que el ADPIC no contiene elementos que aseguren el PIC de los titulares del material biológico usado en las invenciones patentadas ni que les permita a los países de origen reclamar la distribución de beneficios. Por ello este Acuerdo debe ser modificado para incluir la obligación de: a) revelar la fuente y el país de origen de los recursos biológicos y el CT utilizados en las solicitudes de patentes; b) evidencia del consentimiento informado previo obtenido de conformidad con los sistemas nacionales; c) prueba

de la justa y equitativa distribución de beneficios obtenida de conformidad con los regímenes nacionales.

- La Unión Europea ha indicado su disposición a tratar el tema en la OMC, aunque considera que el foro más apropiado resulta la OMPI. Sin embargo, cabe destacar la propuesta elaborada en materia de revelación del origen o fuente de recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado en solicitudes de patentes presentada al Comité de la OMPI (del 16 de noviembre del 2004), que en síntesis propone: un requisito obligatorio debería ser introducido para revelar el país de origen o fuente en solicitudes de patentes; el requisito aplicaría a las solicitudes nacionales, regionales e internacionales; el solicitante debe declarar el país de origen y si no es conocido, la fuente específica de la cual el inventor ha tenido acceso físico; la invención debe estar basada directamente en recursos genéticos; el requisito aplicaría en el caso de conocimiento tradicional, concepto que aún requiere de mayor estudio; si el solicitante de la patente no presenta la información, a pesar de habersele otorgado la posibilidad de remediar la omisión, la solicitud no será procesada; si la información es incorrecta o incompleta, deberían preverse sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, fuera del derecho de patentes; se debe introducir un procedimiento de notificación a ser realizado por las Oficinas de Patentes por ejemplo al Mecanismo de Intercambio de Información del Convenio de Biodiversidad, con el propósito de poner en conocimiento del país de origen la respectiva solicitud. En síntesis la Unión Europea parece dispuesta a discutir la revelación del origen-como requisito obligatorio- en solicitudes de patentes, si la información no se presenta no se daría trámite a misma.

- Aunque Noruega<sup>1</sup> no considera que exista una contradicción entre el ADPIC y el CDB y ha indicado su preferencia por acciones nacionales, ha indicado su acuerdo a discutir la revelación en la OMC, aunque posiblemente con un lenguaje más limitado y consistente con su normativa nacional (la cual exige evidencia del PIC, pero no de la distribución de beneficios).

Por último, a finales de mayo del 2006 seis países, entre ellos India, Brasil y Perú, sometieron una propuesta al Consejo de ADPIC sugiriendo cambios concretos al



ADPIC (un nuevo artículo 29 Bis) para apoyar la revelación del origen.

La Comunicación <sup>2</sup>, pretende incorporar un nuevo artículo 29 bis, cuyas principales disposiciones son:

1. El propósito consiste en establecer una relación de apoyo recíproco entre el CDB y el ADPIC.
2. Comprende los recursos biológicos y el conocimiento tradicional asociado.
3. Debe revelarse en los casos en que las solicitudes de patentes consistan (*concerns*), se deriven de (*derived from*) o hayan sido desarrolladas con recursos biológicos o conocimiento tradicional asociado.
4. Debe revelarse el país que provee los recursos o el conocimiento; de quien en dicho país fueron obtenidos; y después de una investigación razonable, el país de origen. Debe suministrarse evidencia respecto al cumplimiento con los requisitos legales aplicables del país proveedor respecto al consentimiento informado previo y la justa y equitativa distribución de beneficios derivados de la utilización de los recursos o conocimiento tradicional asociado.
5. Las Partes deben requerir al solicitante complementar o corregir la información descrita anteriormente si éste tuviere conocimiento de nueva información.
6. Los Miembros deben publicar la información revelada conjuntamente con la publicación de la solicitud o el otorgamiento de la patente. Lo mismo se dispone en el caso de la información provista para complementar o corregir la inicialmente revelada.
7. Igualmente las Partes deben prevenir el procesamiento de la patente o su otorgamiento o revocar o declarar no ejecutable la patente cuando el solicitante no haya cumplido con las obligaciones de revelación comentadas o cuando haya suministrado información falsa o fraudulenta.

### Revelación del origen y los Tratados de Libre Comercio (TLC)

Asimismo, deben mencionarse las potenciales implicaciones de los TLC-suscritos y ratificados por numerosos países con los Estados Unidos y la Unión Europea y sus correspondientes disposiciones sobre

DPI. Por ejemplo, con relación al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés como DR-CAFTA) se ha indicado que se establece una limitación en materia de divulgación o revelación del origen<sup>3</sup>. El lenguaje utilizado en el DR-CAFTA proviene directamente de la legislación de los Estados Unidos al decir que "Cada Parte establecerá que la divulgación de una invención reclamada debe considerarse que es suficientemente clara y completa si proporciona información que permite que la invención sea efectuada o utilizada por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a la fecha de presentación (art. 15.9.9). En este orden de ideas, la duda que surge es si el texto impide solicitar mayor información al momento de divulgar la patente? Tampoco se menciona la necesidad de indicar cuál es el mejor modo de llevar a cabo la invención, como se requiere en numerosas leyes nacionales. En el caso de los TLC firmados con Perú y Colombia, la redacción de estas disposiciones es muy similar. En el caso del TLC con Perú, se hace referencia, en el Capítulo de Propiedad Intelectual, a la importancia de proteger el conocimiento tradicional, al consentimiento informado previo y la distribución de beneficios relativos al acceso a recursos genéticos, aunque se indica que la mejor forma de alcanzar estos objetivos es por medio de contratos. Mención adicional a estos temas, con diferente énfasis, se realiza en una Carta de Entendimiento y en el Capítulo Ambiental del Tratado. No obstante, no se menciona la revelación del origen en solicitudes de patentes (ni siquiera de forma voluntaria).

### Conclusión

La revelación del origen tiene un impacto limitado en la prevención de la apropiación indebida o biopiratería y por ello debe ser acompañada de otros mecanismos complementarios. Por ejemplo, en algunos de los casos documentados de apropiación indebida mediante patentes, se realizó mención del origen geográfico del recurso. Mecanismos complementarios que permitan mejorar la calidad del otorgamiento de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual se requieren.

Aún en los casos de detección de usos inapropiados, cabe cuestionar la capacidad económica y financiera para poder invalidar las patentes en jurisdicciones foráneas,

proceso costoso y largo. En este orden de ideas, nuevamente surge la necesidad de estudiar otras medidas de países usuarios, por ejemplo, que faciliten el acceso a la justicia, como necesarias para alcanzar los objetivos del CDB.

Por último, aunque estas disposiciones se han establecido en leyes de patentes de algunos países o leyes de biodiversidad y similares, es igualmente aconsejable que, desde la perspectiva estrictamente nacional, los países comiencen a introducir en sus leyes de acceso o similares la obligación estatutaria de exigir, al otorgar acceso, que se revele el origen o fuente del recurso si el solicitante del acceso presenta una solicitud de patente. Aunque no es posible afirmar tajantemente si las oficinas de patentes tomarán en cuenta y de qué forma, estas disposiciones legales o contractuales y si actuarán en contra de una solicitud que incumple las mismas, es una medida que merece ser considerada.

---

\* *Abogado especializado en derecho ambiental. Asesor legal del INBio y profesor de derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica.*

<sup>1</sup> Posteriormente, Noruega presentó su propia propuesta para introducir la revelación del origen. De conformidad con ésta, se trataría de un requisito obligatorio a ser introducido en el art. 29 del ADPIC; se debe revelar el país proveedor y, de ser posible, el país de origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, este último aunque no tenga conexión con los recursos genéticos. Si el país exige el consentimiento informado previo para otorgar el acceso, se debe comprobar el cumplimiento con dicha legislación o bien declarar que esta no existe. En caso de no revelar el origen en la solicitud esta no se procesaría; en caso de que la patente hubiera sido otorgada, la no revelación no sería causa de nulidad de la patente, pero deben establecerse otras sanciones. Por último, se indica que este requisito debe ser compatible con el Tratado de la FAO (Sistema Multilateral de Acceso).

<sup>2</sup> WT/GC/W/564, de fecha 31 de mayo del 2006.

<sup>3</sup> No existe, sin embargo, una interpretación unívoca respecto a las consecuencias de este lenguaje sobre la posibilidad de exigir la revelación del origen. Por otra parte, en la Región Andina, según algunos comentaristas, la situación se presenta diferente y las obligaciones de revelación y prueba de la legalidad del acceso contenidas en las Decisiones Andinas, prevalecen sobre el TLC, por ejemplo, el negociado entre Perú y los Estados Unidos.